

Universidad Católica de Colombia Maestría en Ciencia Política

Università degli Studi di Salerno Máster in Scienze Politiche per la Pace e L'integrazione dei
Popoli

“Las Prácticas Religiosas en la Jurisprudencia Constitucional Colombiana”

Trabajo final para optar por los títulos de Magister en Ciencia Política y Máster in Scienze
Politiche per la Pace e L'integrazione dei Popoli

Investigador: Luz Johanna Albarracín Sánchez

Director: José Alpiniano García-Muñoz, PhD.

Bogotá D.C. - Colombia diciembre de 2018

DEDICATORIA

Dedico esta tesis, primero que nada, a mi Madre, que es mi motor de todo, por ser esa mujer valiente, y decidida del mundo, invencible ante la vida y luchadora para tus hijos, mi ejemplo a seguir, mi TODO. A mi hermano, que me hace ver que por muy mal que esté, siempre tendré a una persona ahí apoyándome. A mi familia, que hacen de cada logro obtenido, uno propio y se enorgullecen de mí, gracias por todo el cariño, a las personas que me rodean y me quieren ya que, sin sus palabras de aliento y su esfuerzo, para que siga construyéndome como profesional, no sería posible seguir adelante y lógicamente a Dios, que me permite día a día trazarme nuevas metas, y me ayuda a cumplirlas.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

RESUMEN

En un estado democrático, social y pluralista, como lo es Colombia, esta investigación se fundamenta en el análisis, sobre la protección de un derecho fundamental como lo son las prácticas religiosas, y la importancia que éstas cumplen dentro de la esfera pública, analizando algunas tendencias contemporáneas relevantes dentro de los espacios, en que las personas se desenvuelven, que terminan desatando incidentes de carácter jurídico. Para tal efecto, consideramos relevante analizar la doctrina de Horkheimer, cuyo pensamiento se ve reflejado en la contemporaneidad, en la toma de decisiones justas, por los Tribunales Internacionales, estudiando así el comportamiento socio jurídico de las tendencias de las posiciones del desarrollo humano en el análisis organizacional del estado, el renovado protagonismo del fenómeno religioso en la dimensión pública, su recepción político-jurídica, la primacía de la libertad religiosa como principio informador del orden legal y el lugar que desenvuelve la religión en el Estado.

Palabras Clave: Estado, democracia, desarrollo humano, prácticas religiosas, sociedad, internacional, religión.

ABSTRACT

In a democratic, social and pluralist state, as Colombia is, this research is based on analysis, on the protection of a fundamental right such as religious practices, and the importance that you are fulfilling within the public sphere, analyzing some Relevant contemporary trends within spaces, in which people develop, which end up triggering incidents of a legal nature. For this purpose, we consider relevant to analyze the doctrine of Horkheimer, whose thought is reflected in the contemporary, in making fair decisions, by the International Tribunals, thus studying the socio-legal behavior of the tendencies of the positions of human development in the organizational analysis of the state, the renewed prominence of the religious phenomenon in the public dimension, its politico-legal reception, the primacy of religious freedom as a principle that informs the legal order and the place that religion develops in the State.

Keywords: State, democracy, human development, religious practices, society, international, religion.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
PRIMER CAPITULO	13
Jurisprudencia Constitucional Colombiana	13
1. RELIGIÓN Y EDUCACIÓN	13
1.1. PLURALIDAD RELIGIOSA.....	14
1.2 EDUCACIÓN RELIGIOSA.....	22
1.3 INTERVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN	29
2. RELIGIÓN, SALUD Y TRABAJO	38
2.1 PREVALENCIA DE LA SALUD.....	39
2.2 OBLIGACIONES LABORALES Y LIBERTAD RELIGIOSA.....	46
2.3 VIDA Y RELIGIÓN	55
3. RELIGIÓN Y RECONOCIMIENTO O PARTICIPACIÓN.....	65
3.1 CONFESIONES RELIGIOSAS	65
3.2 DIVERSIDAD ÉTNICA	69
3.3 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.....	72
SEGUNDO CAPITULO.....	79
Max Horkheimer: Política y Religión.....	79
1. LA VERDAD DE LA RELIGIÓN.....	84
1.1 UNA PRIMERA INTERPRETACIÓN.....	86
1.2 RELIGIÓN Y CIENCIA	92
2. SINGULARIDAD EN EL MUNDO ADMINISTRADO	93
2.1 EL AMOR ELIMINANDO LA SINGULARIDAD: EL MUNDO ADMINISTRADO.....	101
2.2 ELIMINANDO LA SINGULARIDAD: EL MUNDO ADMINISTRADO.....	102
TERCER CAPITULO	104
El Principio Para La Decisión Óptima.....	104
1. LA DECISIÓN ÓPTIMA.....	106
1.1 BASE FUNDAMENTAL.....	106
1.2 LA SOCIEDAD DENTRO DEL PENSAMIENTO DE RELIGIÓN QUE EXPONE HORKHEIMER.....	108
1.3 EL PRINCIPIO GENERAL PARA UNA DECISIÓN JUSTA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O POLÍTICO.....	109
2. LA DECISIÓN ÓPTIMA EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA	110
2.1 RELIGIÓN Y EDUCACIÓN	111
2.2 RELIGIÓN, SALUD Y TRABAJO.....	112
2.3 RELIGIÓN Y RECONOCIMIENTO O PARTICIPACIÓN	114
3. EL PRINCIPIO EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES.....	115
3.1 KOKKINAKIS CONTRA GRECIA	115
3.2 LEYLA SAHIN CONTRA TURQUÍA.....	117

3.3 JOSÉ ANTONIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRA EL GOBIERNO ESPAÑOL.....	118
3.4 DIFERENTES CASOS CONTRA REINO UNIDO	121
3.4.1 EWAIDA CONTRA REINO UNIDO.....	121
3.4.2 CHAPLIN CONTRA REINO UNIDO	123
3.4.3 LADELE CONTRA REINO UNIDO	125
3.4.4 MCFARLANE CONTRA REINO UNIDO	127
3.5 INSTITUTO NACIONAL DE LA FAMILIA Y LA VIDA CONTRA CALIFORNIA.....	131
Conclusiones	132
Bibliografía	140

INTRODUCCIÓN

El Derecho a la Libertad Religiosa, ha sido reconocido como inherente a la dignidad del mismo, como necesaria para la realización de su proyecto de vida y que por lo mismo ha merecido la consagración y protección jurídica. Al respecto, sin lugar a dudas la Constitución Política de 1991 significó para la historia constitucional de nuestro país un gran hito, especialmente al dar una importancia inusitada a las minorías, entre ellas a las religiosas, y reconocer ampliamente la dimensión religiosa del ser humano, como un elemento esencial a su naturaleza y dignidad, lo que se corrobora no sólo en la consagración de la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental, su Artículo 19 C.P.C. donde nos expresa “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

Como notas características de esta consagración podemos determinar las siguientes:

- a.** Se consagra la libertad religiosa, la que se concreta esencialmente en el derecho a profesar cualquier religión.
- b.** La libertad de cultos, no obstante entenderse incluida en la libertad religiosa, fue también expresamente consagrada, por lo tanto, todas las personas tienen el derecho a realizar las prácticas o ritos que constituyen manifestaciones externas de la religión que libremente se profesa.
- c.** También y de manera expresa, se consagra el derecho a propagar o divulgar las creencias que se profesan y esto puede hacerse privada o públicamente.
- d.** Se establece la igualdad de las iglesias y confesiones ante la ley, como una manifestación clara de la eliminación de toda forma de confesionalismo religioso.
- e.** Son titulares del derecho a la libertad religiosa y de cultos las personas naturales, así como las entidades religiosas, bien sean iglesias o confesiones religiosas.

- f. Carencia de límites expresos y específicamente referidos a este derecho, como sí lo traían las constituciones que le precedieron, lo que no debe dar lugar a señalar que se trata de un derecho absoluto, porque en todo caso debe sujeción al ordenamiento jurídico en su integridad, el que se erige como límite para ésta como para todas las demás libertades; lo que si puede interpretarse de tales disposiciones, es el reconocimiento del hecho religioso como positivo, liberalizando en consecuencia su ejercicio.

Para Vladimiro Naranjo, la Libertad Religiosa consiste en: “es fácil apreciar que ésta no es más que un aspecto de la libertad religiosa, el aspecto externo que se comprende en ella. No es, por tanto, un derecho autónomo. En efecto, como se ha dicho, la religión consiste en una relación personal con Dios, la cual se expresa exteriormente a través del culto público o privado; el culto, por su parte, es el conjunto de demostraciones exteriores presentados a Dios; luego, sin la relación con Dios, esto es sin religión, no se da un culto”. (Sentencia C-617 de 1.997).

Ahora, bien podemos decir entonces que la Relación entre las Prácticas Religiosas y la Libertad Religiosa, es que la primera es la libre exteriorización de ese pensamiento a través de las prácticas y ritos que conforman el culto y la segunda es la manifestación de la libertad de pensamiento sobre una materia religiosa. (BADENI Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I, 2 segunda edición actualizada y ampliada. Buenos Aires. p. 532 y 533.); y, por otro lado, Vladimiro Naranjo, ha explicado que ésta no es más que un aspecto de la libertad religiosa, que se comprende en ella. (Sentencia C-616 de 1997).

La Jurisprudencia Colombiana, sobre prácticas Religiosas, es importante, porque la libertad de culto es un derecho integrado en la Constitución Política de 1991, Ley 133 de 1994 y demás normas concordantes nacionales, tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero si hablamos en el marco de lo jurisprudencial, en Colombia, podemos encontrar el tema desde 1994.

En ese sentido para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó como método inicial en el trabajo, de un recorrido Jurisprudencial Colombiano, donde podemos hallar, sentencias desde 1994 hasta 2014; de donde se seleccionaron treinta y tres (33) jurisprudencias; y de allí se encontró, como línea Jurisprudencial la forma en que la corte Constitucional Colombiana a solucionado la colisión de derechos entre el conflicto de personas que profesan diferentes Religiones; en un análisis más profundo se pudo identificar diferentes temas, al respecto, dándoles una clasificación de la siguiente manera:

- Religión y Educación.
- Religión, Salud y Trabajo
- Religión y Reconocimiento o Participación

Dentro, del marco teórico, me base en el libro “Anhelo de Justicia” Max Horkeimer, donde nos define la religión como “las confesiones que deben seguir existiendo, pero no con dogmas, si no como expresión de un anhelo. pues todos nosotros debemos estar unidos por el anhelo de lo que sucede en este mundo, la injusticia y el horror, no sea la última palabra, el anhelo de que exista otro y de ello nos aseguramos en lo que denominamos religión. Debemos estar unidos en la conciencia de que somos seres finitos. No debemos renunciar al concepto del infinito que ha desarrollado la religión, pero no debemos hacer de él un dogma, si no que conservamos y prolongamos determinadas costumbres del pasado para mantener, vivo el anhelo.”

En la segunda parte del método de investigación, empiezo a realizar una comparación entre la Jurisprudencia Colombiana y la tesis que plantea Max Horkeimer, en el libro anteriormente enunciado, y de allí realizo posteriormente, la comparación con los Tribunales Internacionales, para verificar si se encuentra la solución óptima que plantea Horkeimer en los fallos internacionales, y de allí desglosar una conclusión.

De los tres ámbitos antes referidos, podemos decir entonces:

- **Jurisprudencia Constitucional Colombiana**

1. Religión y Educación

La Corte entra a resolver conflictos de derechos entre las creencias religiosas y los principios o normas, para fundar una institución educativa, dando como resultado, que prima las creencias religiosas sobre el derecho de fundar instituciones con principios fundacionales determinados.

2. Religión, Salud y Trabajo

La corte entra a resolver una colisión de derechos entre el procedimiento que tiene un médico para proteger la salud y la vida, de un paciente, dando como resultado que las creencias religiosas le permiten al médico abstenerse de someter al paciente al procedimiento.

3. Religión y Reconocimiento o Participación

La corte entra a resolver una colisión de derechos entre las creencias religiosas y el choque de culturas, dando como resultado que no hay un principio que prevalece, si no que se encuentra una arbitrariedad; ya que dependen del caso que se establezca.

- **Max Horkheimer: Política y Religión**

1. La Verdad de la Religión

¿Qué es la Religión en el buen sentido? Es el inextinguible impulso, sostenido contra la realidad, de que esta debe cambiar, que se rompa la maldición y se abra paso a la justicia. Donde la vida está, hasta en el más pequeño gesto, bajo este signo, allí hay Religión. Y ¿qué es la Religión en el mal sentido? Este mismo impulso pervertido en afirmación en proclamación y por tanto en transfiguración de la realidad a pesar de todos sus flagelos; es la vana mentira de que el mal, el sufrimiento, el horror tienen un sentido, bien gracias al futuro terreno, bien al futuro celestial la mentira no necesita si quiera de la cruz; ella anida ya en el mismo concepto

ontológico, de trascendencia, cuando el impulso es auténtico no necesita de ninguna apología, ni admite justificación alguna.

2. Singularidad en el Mundo Administrado

Horkheimer nos muestra la pérdida del sentido, de una forma pesimista, en un mundo cada vez más administrado, organizado y caótico, pero aun así se espera el anhelo, que el ser en un momento de reflexión, cuando sea consciente de su infinitud sienta amor por su prójimo y pueda revertir el horror de las consecuencias de un mundo administrado.

- **El Principio Para La Decisión Óptima**

La función de la religión dentro del Orden Constitucional o Político apunta hacia la toma de decisiones acertadas en base a la presencia del anhelo de lo justo. Donde mi prójimo es igual a mí, sin importar su creencia religiosa, así pues, el respeto y la tolerancia, vendrían a ser bases fundamentales para convivir de manera adecuada dentro de una sociedad con pluralidad de religiones, sin embargo, en el momento de encontrar problemas de conflictos dentro de la sociedad por sus creencias religiosas, y lo cual se deba recurrir a instancias de poder como lo son los Tribunales y demás; la solución óptima sería encontrar el equilibrio, para que ninguna persona salga perjudicada, ni moral, ni económicamente; ya sea desde el ámbito social que se enmarque el conflicto, ocasionado a raíz de su convicción o creencia religiosa, por ejemplo: colegio, trabajo, comunidad, etc.

PRIMER CAPITULO

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

1. RELIGIÓN Y EDUCACIÓN

La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia; por ello toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla garantizando el estado la libertad de enseñanza.

A su turno los artículos 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un servicio público que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación Religiosa.

La Ley General de Educación, desarrolla y respeta los principios constitucionales enunciados anteriormente dentro de la concepción de que la educación es un proceso de formación integral, permanente, personal, cultural y social de la persona humana; por tanto, se ocupa de señalar las normas generales para regular dicho servicio público, acorde con las necesidades e intereses de las personas de la familia y de la sociedad.

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal e informal, los

establecimientos educativos privados y estatales, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación, para lo cual entraremos a analizar, lo que dice la Corte Constitucional, sobre el tema de la Religión y Educación en Colombia.

1.1. PLURALIDAD RELIGIOSA.

Entre otras varias providencias, la Corte Constitucional Colombiana se ha referido a este asunto en las sentencias T-345/02, C-778/14, T-832/11. En estas sentencias ha vinculado este asunto al libre desarrollo de la personalidad, al pleno desarrollo de la educación y al derecho a la igualdad.

Así, la Corte Constitucional Colombiana, (Sentencia T-345/02), establece y aclara las posibilidades de fundar establecimientos educativos:

- Colombia se ha constituido desde 1991 como una república democrática, participativa y pluralista (artículo 1º, C.P.), con lo cual se reconoce la diversidad étnica, cultural, política y social de los diferentes grupos humanos que residen en el territorio nacional. Este pluralismo puede reflejarse en el servicio público de educación, por cuanto un grupo de personas pueden agruparse para fundar un establecimiento educativo a través del cual se fomente e incentiven ciertos valores, dentro de los que caben los religiosos. En esta medida, la Constitución (art. 68) reconoce la posibilidad de que los particulares funden establecimientos educativos confesionales.

Ahora bien, la Corte Constitucional Colombiana, (Sentencia C-778/14), nos establece la vulneración de esto como enfoque de oportunidad para ingresar a un colegio al establecer que:

- El Estado colombiano tiene un carácter laico, por lo cual es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el país. De tal manera, se logra asegurar el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas, ii) La libertad de cultos sólo se logra siempre y cuando quien profesa alguna creencia religiosa o ciertas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, difundirlas, defenderlas, y a practicar lo que de ellas se desprende, de tal forma que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna pueda llegar a invadirla para forzar cambios de perspectiva, molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, iii) Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa la importancia capital que se le atribuye a la coherencia que puede llevar el creyente entre su vida personal y su creencia, iv) La disposición sobre libertad religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, v) Este derecho debe ser plenamente garantizado en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matrícula del estudiante a un establecimiento educativo por razón de sus creencias religiosas (p. 01).

El orden constitucional vigente se aparta así de otras formas de organización de un Estado en las que se impone excluir por completo la religión en el ámbito de la educación; o, por el contrario, se exige que un credo religioso oriente a todos los planteles educativos. En esta medida no viola la Constitución, prima facie, el hecho de que un grupo de personas, en ejercicio de sus libertades de asociación, de religión, de cultos y de expresión, así como también en ejercicio del derecho a fundar establecimientos educativos y a la libertad de enseñanza, cree una

universidad privada en la que, por ejemplo, se promueva un determinado credo religioso estableciendo clase de religión obligatoria o, incluso, asistencia obligatoria a un culto.

De lo anterior resulta que para la Corte Constitucional es inadmisble impedir a una comunidad católica acceder a una educación adecuada a sus convicciones, en la que se promuevan sus creencias religiosas o la práctica del culto, como impedir que a los raizales o a un grupo de indígenas se les impida acceder a una educación que reconozca su cosmovisión y sus formas de vida.

De igual, forma el Desarrolla de la personalidad, lo encontramos, consagrado como derecho fundamental dentro de la Constitución Nacional, en su Art. 16, la vulneración de este derecho, nos lo cita varias sentencias en diferentes formas, al negar el cupo de estudiantes, por sus creencias religiosas que van en contra de lo que dispone el reglamento estudiantil; así pues, las podemos citar de la siguiente forma:

La corte constitucional colombiana (Sentencia T832-11) nos lo cita como un derecho vulnerado, dentro del caso, que una escuela normal niegue el cupo de unos estudiantes, por sus creencias religiosas y de ahí se desglosa que se vulnere el pleno desarrollo de la personalidad:

- El problema jurídico que debe establecer la Sala Tercera de Revisión consiste en determinar si la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo del Municipio de Tadó, Departamento del Chocó, vulneró los derechos fundamentales a la educación, a la libertad religiosa y a la dignidad humana a Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña quienes son feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por cuanto les exigió el uso de pantalón, acorde a los términos prescritos en el Manual de Convivencia de dicha institución, como requisito

para ser admitidas en el Programa de Educación Complementaria que ofrecía dicha institución (p.09).

La Corte Constitucional Colombiana, (Sentencia C-778-14), nos conduce por el pleno desarrollo de la personalidad en la parte que expresa:

- La convivencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y en que, en el plano de la libertad que aquí se invoca, aquélla sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa unas ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelerlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (artículo 18 C.P.), (p. 15).

Ahora bien, la Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T-098/11), nos lo indica cuando un colegio al ser católico establece en su manual de convivencia, ciertos criterios que van en contra de la libertad religiosa, Artículo 10° (deberes de los estudiantes), numeral 4°: “Conocer, respetar e integrar a su vida escolar y personal la filosofía del colegio Seminario Menor Arquidiocesano y el manejo normativo y de convivencia que de ella se deriva.” (p. 04) Artículo 68 (normas de disciplina, presentación personal), numeral 3°: “Llevar cabello corto y peinado normal, sin exageraciones, aseado y sin ninguna clase de cintas o de tintes.” (p. 10)

Además, es imperante recalcar en la misma Sentencia nos habla de los fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política:

- La educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos... convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. ...

La libertad de educación, entre otras varias providencias, la Corte Constitucional Colombiana se ha referido a este asunto en las sentencias T 832/11, T- 763 de 2006, T-393 de 1997.

La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T 832/11), nos invoca este fundamento como derecho fundamental, por ser:

Inherente y esencial al ser humano, dignificador de la persona humana, además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. En esta medida, se trata de un derecho fundamental porque, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Adicionalmente, este derecho tiene un núcleo esencial que, está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación, así como de permanecer en el mismo.

El Estado colombiano tiene un carácter laico lo cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el país, asegurando de esa forma el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.

La libertad religiosa sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelerlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (Const., 1991, artículo 18).

Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa. La disposición sobre libertad religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, la libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matrícula del estudiante.

La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T-393/1997) estudió varios expedientes relacionados con adolescentes que eran madres solteras y a quienes se les negaba el acceso a la educación, en razón de dicha condición, pues tal consecuencia jurídica estaba prescrita en los manuales de convivencia de estos establecimientos educativos. Aunque los hechos de esta sentencia no se relacionan de manera franca con el ejercicio de la libertad religiosa, La Corte

Constitucional Colombiana (Sentencia T 832/11) estableció ciertas reglas que fueron acogidas en otras providencias y que ameritan ser referenciadas para la solución del caso en concreto:

- Una vez más se insiste en que el juez constitucional debe propender (sic) la convivencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y en que, en el plano de la libertad que aquí se invoca, aquélla sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa unas ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelerlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (Const., 1991, artículo 18). Por lo tanto, no puede afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas de la profesión de sus ideas o de prácticas acordes con el libre ejercicio de aquélla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas.

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todo ciudadano, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer

educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad.

El Derecho a la igualdad, contemplado entonces dentro de la Constitución Política de Colombia, dentro de su Art. 13, es un derecho inherente que tenemos todos los seres humanos para ser reconocidos como iguales ante la ley y de gozar de todos los derechos otorgados de manera incondicional.

La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia C-778-14), se presenta para resolver el caso de una niña que, en reunión de padres de familia, el 28 de noviembre de 2013, fecha de la entrega del informe final de las actividades académicas, la rectora de la institución accionada le informó que la menor de edad no tendría cupo para el siguiente año lectivo escolar. Lo anterior bajo el argumento de que la niña no se adapta al modelo del colegio, ni muestra un perfil acorde a la identidad del centro educativo, siendo la única alumna a la cual se le negó el cupo, debido a su religión.

Se contempla entonces la vulneración de este derecho, toda vez que:

- El carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que, en el ordenamiento

constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.

1.2 EDUCACIÓN RELIGIOSA.

Con respecto a este tema, La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia C-617/2001), dice lo siguiente:

- Es fácil apreciar que ésta no es más que un aspecto de la libertad religiosa, el aspecto externo que se comprende en ella. No es, por tanto, un derecho autónomo. En efecto, como se ha dicho, la religión consiste en una relación personal con Dios, la cual se expresa exteriormente a través del culto público o privado; el culto, por su parte, es el conjunto de demostraciones exteriores presentadas a Dios; luego, sin la relación con Dios, esto es sin religión, no se da en cultos.

A este respecto la Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T-430/93), esta Corporación manifestó:

- El artículo 19 de la Constitución no señala cuáles son los límites externos del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Este silencio del constituyente no debe llevarnos a creer que el derecho a profesar y difundir libremente la religión es absoluto e incondicional. En el Estado de Derecho, hay tres principios que rigen la libertad de las personas (el de sujeción al ordenamiento jurídico, el de la buena fé y de la Responsabilidad) dentro de los cuales debe encuadrarse siempre el ejercicio de

la libertad religiosa, las personas que en Colombia profesan y difunden una religión están obligadas: a cumplir lo que el derecho positivo manda, mientras sea justo y posible; a no hacer lo que jurídicamente está prohibido; a comportarse lealmente con el Estado y con sus conciudadanos, y a someterse a las consecuencias jurídicas de sus actos ilícitos.

La Corte Constitucional Colombiana, (Sentencia 662/1999), con respecto a los Colegios del Estado manifestó:

- Respecto al derecho de los padres de escoger la educación religiosa de sus hijos menores ha de indicarse lo siguiente: La Ley General de la Educación (Ley 115 de 1.994) señala las normas generales que regulan el Servicio Público de la Educación, el cual cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad y se fundamenta en los principios consagrados por la Carta Política sobre los derechos que tiene toda persona, a la educación y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

De otra parte, el artículo 6° ibídem al referirse a la comunidad educativa, indica que ésta participará en la dirección de los establecimientos educativos, y está conformada por los estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.

Así mismo, el artículo 7° de la Ley No. 115 de 1994 garantiza que a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la

mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde elegir para sus hijos las instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional, habilitándolos para participar de diferentes formas, como por ejemplo, a través de las asociaciones de padres de familia.

De otra parte, el inciso 4° del artículo 68 de la Carta Política determina que, los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Principio que es recogido y reconocido en la Ley 115 de 1.994, al estipular en su artículo 24 el derecho a recibir educación religiosa y facultar a los establecimientos educativos para ofrecerla de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política y de conformidad con el artículo 6° de la ley 133 de 1994, según el cual:

- La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona: h) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz.

Se presentaron sentencias de Salas de Revisión en las cuales se evidencia una colisión entre los presupuestos expresados por un colegio y las convicciones de las estudiantes. La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T-393/1997), estudió varios expedientes relacionados con adolescentes que eran madres solteras y a quienes se les negaba el acceso a la educación, en razón de dicha condición, pues tal consecuencia jurídica estaba prescrita en los manuales de convivencia de estos establecimientos educativos.

Aunque los hechos de esta providencia no se relacionan de manera franca con el ejercicio de la libertad religiosa, la Corte estableció ciertas reglas que fueron acogidas en otras providencias y que ameritan ser referenciadas para la solución del caso concreto:

- Una vez más se insiste en que el juez constitucional debe propender (sic) la convivencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta y en que, en el plano de la libertad que aquí se invoca, aquélla sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa unas ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelerlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su voluntad. (Const...1991, artículo 18).

Por otro lado, la Corte Constitucional Colombiana (Sentencia 393/1999), aduce que en la cláusula 4ª del aludido Contrato (MEN/Conferencia Episcopal), se dispone:

- La enseñanza impartida en los centros educativos objeto de este contrato debe efectuarse de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes del Ministerio de Educación Nacional y las que se expidan durante su vigencia.

Parágrafo: Acorde con el contenido del Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación, teniendo, además, en consideración el carácter católico de La conferencia Episcopal de Colombia, se entiende que en los establecimientos educativos objeto del presente contrato, a los educandos católicos se les ofrecerá educación religiosa de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia Católica, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral puede ser manifestada expresamente en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores de los menores; tal decisión no implicará revelación de las creencias ni dará lugar a ninguna forma de discriminación. Respecto de la enseñanza religiosa para alumnos no católicos, se observarán las disposiciones jurídicas vigentes o que se expidan dentro de la duración del presente contrato.

El Artículo 6° de la Ley 133 de 1994, estipula que:

- La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona:
 - a) De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e información o rehusarla.

- b) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz;

Tratándose del ingreso, ascenso o permanencia en capellanías o en la docencia de educación religiosa y moral, deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada de la Iglesia o confesión de la religión a que asista o enseñe.

Por lo tanto, no puede afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas de la profesión de sus ideas o de prácticas acordes con el libre ejercicio de aquélla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas.

Con respecto a las instituciones educativas confesionales, La Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T 345/02) nos manifestó:

- Colombia se ha constituido desde 1991 como una república democrática, participativa y pluralista (Const. 1991, art. 1), con lo cual se reconoce la diversidad étnica, cultural, política y social de los diferentes grupos humanos que residen en el territorio nacional. Este pluralismo puede reflejarse en el servicio público de educación, por

cuanto un grupo de personas pueden agruparse para fundar un establecimiento educativo a través del cual se fomente e incentiven ciertos valores, dentro de los que caben los religiosos. En esta medida, reconoce la posibilidad de que los particulares funden establecimientos educativos confesionales (Const. 1991, art. 68).

Constitucionalmente es tan inadmisible impedir a una comunidad católica acceder a una educación adecuada a sus convicciones, en la que se promuevan sus creencias religiosas o la práctica del culto, como impedir que a los raizales o a un grupo de indígenas se les impida acceder a una educación que reconozca su cosmovisión y sus formas de vida. El orden constitucional vigente se aparta así de otras formas de organización de un Estado en las que, por ejemplo, se impone excluir por completo la religión en el ámbito de la educación, o, por el contrario, se exige que un credo religioso oriente a todos los planteles educativos.

En esta medida no viola la Constitución, *prima facie*, el hecho de que un grupo de personas, en ejercicio de sus libertades de asociación, de religión, de cultos y de expresión, así como también en ejercicio del derecho a fundar establecimientos educativos y a la libertad de enseñanza, cree una universidad privada en la que, por ejemplo, se promueva un determinado credo religioso estableciendo clase de religión obligatoria o, incluso, asistencia obligatoria a un culto.

De tal manera que el pluralismo se garantiza reconociendo que la oferta educativa sea diversa con el fin de que las personas puedan escoger el establecimiento educativo en el cual desean recibir enseñanza. La protección de esa diversidad, comprende la garantía de que haya establecimientos educativos, en cuanto a la dimensión religiosa,

tanto de orientación laica, o agnóstica, como de inspiración confesional; y dentro de esta segunda categoría, establecimientos inscritos en diferentes denominaciones religiosas, aún las minoritarias en el contexto colombiano.

Ahora bien, lo que garantiza que los establecimientos educativos fundados por particulares representen una expresión del pluralismo es la forma como éstos se presentan a la sociedad. Cuando una persona está escogiendo un plantel educativo, bien sea para sí mismo o para sus hijos, tiene el derecho a saber cuál opción educativa representa cada uno con toda claridad. Así, por ejemplo, ha de saber si se trata de un establecimiento confesional o no; y si lo es, si en él se exige tener un credo particular o no, y cuál es el tratamiento que recibirán quienes no compartan dicho credo, así como cuáles son los valores que orientan a dicho establecimiento, respetándose naturalmente la concepción que de los mismos se pueda tener a la luz de determinada confesión religiosa.

No obstante, esta facultad no es ilimitada. La posibilidad que concede la Carta a los particulares para fundar establecimientos educativos encuentra límite en las condiciones para su creación y gestión fijadas por la ley (Const. 1991, art. 68). La autonomía universitaria encuentra límite en la ley (Const. 1991, art. 69) y en cuanto al derecho a difundir un credo, como institución confesional, encuentra como límites en los derechos de los demás, la *sociedad democrática* y el ordenamiento jurídico.

1.3 INTERVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN.

Es el conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, establecimientos educativos, instituciones sociales, recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales,

administrativos y financieros, articulados para alcanzar los objetivos de la educación. Se organiza en educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano (reemplazando la denominación no formal) y educación informal. La entidad encargada de su coordinación y regulación es el Ministerio de Educación de Colombia.

La Corte Constitucional (Sentencia T-662/99) nos menciona dentro de su contexto lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que debe propender por formar al colombiano en los derechos humanos, a la paz y a la democracia (Const. 1999, art. 67.), debe ratificarse que es el Estado quien tiene la misión de regular y vigilar la educación, con miras a la búsqueda y garantía del interés general, de la calidad del sistema educativo, del cumplimiento de sus fines y del acceso de todos los ciudadanos a una formación integral e idónea, para los educandos. En consecuencia, es el Estado quien debe orientar la educación conforme a tales fines sin desconocer en modo alguno el núcleo esencial del derecho a la educación, como ya lo ha señalado esta Corporación.

La Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-345/02) nos indica lo siguiente:

- Colombia se ha constituido desde 1991 como una república democrática, participativa y pluralista (Const. 1991, art. 1.), con lo cual se reconoce la diversidad étnica, cultural, política y social de los diferentes grupos humanos que residen en el territorio nacional. Este pluralismo puede reflejarse en el servicio público de educación, por cuanto un grupo de personas pueden agruparse para fundar un establecimiento educativo a través del cual se fomente e incentiven ciertos valores, dentro de los que

caben los religiosos. En esta medida, (Const. 1991, art, 68)) reconoce la posibilidad de que los particulares funden establecimientos educativos confesionales.

Constitucionalmente es tan inadmisibile impedir a una comunidad católica acceder a una educación adecuada a sus convicciones, en la que se promuevan sus creencias religiosas o la práctica del culto, como impedir que a los raizales o a un grupo de indígenas se les impida acceder a una educación que reconozca su cosmovisión y sus formas de vida. El orden constitucional vigente se aparta así de otras formas de organización de un Estado en las que, por ejemplo, se impone excluir por completo la religión en el ámbito de la educación, o por el contrario, se exige que un credo religioso oriente a todos los planteles educativos. En esta medida no viola la Constitución, *prima facie*, el hecho de que un grupo de personas, en ejercicio de sus libertades de asociación, de religión, de cultos y de expresión, así como también en ejercicio del derecho a fundar establecimientos educativos y a la libertad de enseñanza, cree una universidad privada en la que, por ejemplo, se promueva un determinado credo religioso estableciendo clase de religión obligatoria o, incluso, asistencia obligatoria a un culto.

Sobre la pluralidad de ofertas educativas, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-832/11) nos habla de:

- Estado colombiano tiene un carácter laico lo cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el país, asegurando de esa forma el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones

religiosas. ii) La libertad religiosa sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelerlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (Const. 1991, art. 18).

Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa. iv) La disposición sobre libertad religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, v) la libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matrícula del estudiante.

La Corte Constitucional, (Sentencia C-350/1994) razonó de la siguiente manera:

- En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace

en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que, en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.

Pero, incluso si se aceptara que esas múltiples consagraciones son posibles, el argumento no es válido porque parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas.

Ahora bien, La Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T-832/11), defiende la posesión del pluralismo cuando en las consideraciones de esa providencia aducen que el Estado colombiano tiene un carácter laico lo cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el país, de esa forma se aseguran el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas. Pero el carácter laico del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el modelo de los países, no se extiende de manera absoluta a la forma de vestir o de expresarse de los jóvenes que concurren a los establecimientos educativos de carácter público.

De igual forma, La Corte Constitucional Colombiana (Sentencia T-101/ 98) nos señala:

- Los colegios oficiales no pueden fundamentar su proyecto educativo en un paradigma religioso específico, pues ello implica la violación de los principios fundantes del Estado dirigidos a garantizar el pluralismo y la igualdad de oportunidades, en la medida en que restringen y condicionan el acceso a la prestación de un servicio público a cargo directamente el Estado, que en esas circunstancias queda supeditado a que el usuario comparta y practique los mandatos de un determinado credo o religión, o por lo menos a que durante todo el proceso educativo se le transmitan sus postulados y fundamentos. Eso no quiere decir que un colegio oficial, atendiendo las características socio-culturales de la región en que funciona, no pueda ofrecer a sus alumnos una específica enseñanza religiosa, siempre y los padres de familia, dada la condición de minoría de edad de sus hijos, gocen de plena libertad para aceptarla o no.

Uno de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando, al tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y el respeto del “otro” en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos. En la ley general de educación, el Ministerio de Educación de Colombia, (8 de febrero de 1994), Ley 115, art. 5, numeral 1, señala como uno de los fines de la misma:

- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral,

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

La Corte Constitucional, (Sentencia T377/95) dice:

- La educación en un Estado social de derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogeneizar comportamientos y actitudes ante la vida (...), concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogeneización del pensamiento de los individuos.

Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no sólo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo;

esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos, que para todos consagra la Constitución.

La importancia del decreto 133 de 199, la cual la Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T- 662/99) pondera este decreto, como referencia a la Educación y la libertad religiosa toda vez que “(i) la libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida, (que implica la libertad de información y de expresión sin las cuales la persona no podría formarse una opinión ni expresarla); (ii) la libertad de cambiar de religión y (iii) de no profesar ninguna, entre otras conductas que, no obstante pertenecer el individuo a una religión o confesión religiosas, deben ser respetadas por encima de cualquier propósito de coacción; (...) la posibilidad de (iv) practicarlas sin perturbación o coacción externa, contraria a las propias convicciones, y (v) de realizar actos de oración y de culto, (vi) de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, (vii) de conmemorar festividades, (viii) de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia, (ix) a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión y a sus normas, (x) de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla o de (xi) determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia.

Estos límites al derecho a la libertad de cultos, se encuentran consagrados igualmente, el Congreso de la República de Colombia, (23 de mayo de 1994), en la Ley 133 en su artículo 4°, habla sobre la libertad religiosa y de cultos, en el que se señala que:

- El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática.

Esta circunstancia conlleva, a que en una sociedad pluralista en la que haya diversas religiones, sea necesario imponer algunas restricciones para el ejercicio pacífico, simultáneo y legítimo de todas las expresiones religiosas, en igualdad de oportunidades.

Por ende, toda persona que profesa o difunde sus creencias u convicciones religiosas dentro de un régimen democrático tiene derecho al máximo de libertad y el mínimo de restricción, lo cual no significa irresponsabilidad ni excesos. En efecto, quien profesa una religión y manifiesta su práctica, debe someterse a las normas de conducta dictadas por la autoridad pública y a los límites necesarios para el ejercicio armónico de sus derechos, en comunidad.

Nuevamente el Congreso de la República de Colombia, (23 de mayo de 1994), en la Ley 133 artículo 6 numeral H, precisa que el derecho fundamental a la libertad religiosa implica, entre otros, el derecho de toda persona a: “recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; a recibir esa enseñanza e información, o a rehusarla”.

Igualmente, la norma en comento, consagra también como elemento de la libertad religiosa y de cultos, los derechos de la persona:

- De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz.

2. RELIGIÓN, SALUD Y TRABAJO.

El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

A su vez el derecho al trabajo está consagrado dentro de la Constitución Política, en el artículo 25 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

De esta forma se hace una revisión sobre la religión, la salud y el trabajo, donde se establecen los beneficios que generalmente determinan las creencias y prácticas religiosas en el proceso salud- enfermedad, y el área laboral, destacándose sus caracteres extrínsecos e intrínsecos, así como los factores psicológicos y sociales que explican tales influencias, dentro de la Corte Constitucional Colombiana.

2 .1 PREVALENCIA DE LA SALUD.

Entre otras varias providencias, la Corte Constitucional Colombiana, se ha referido a este asunto en particular en la sentencia T-052/10, y otras sentencias que también tocan este asunto son: T-401/94 y T-411/94. En estas sentencias se han vinculado asuntos como el libre desarrollo de la salud y el libre desarrollo de cultos.

Así, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-401/ 94), habla del derecho a la salud en cuanto a:

- Todo paciente tiene derecho a rehusar la aplicación de un determinado tratamiento sobre su cuerpo. Sin embargo, el hecho de no manifestarlo y de aceptar las prescripciones clínicas, es un indicio suficiente para considerar una aceptación tácita que puede bastar para que el médico proceda con su tratamiento. La voluntad del paciente de preferir una cosa sobre otra es una razón que el médico debe tener en cuenta. La contraindicación, en muchos casos, hace parte de los criterios de sopesación que el enfermo tiene en cuenta para determinar su estado de salud. Es posible establecer una diferenciación entre la situación mental del paciente -

patológica o no - y su autonomía o capacidad para consentir. En este orden de ideas, la contraindicación hace parte del espacio de discrecionalidad y autonomía que posee el paciente frente al médico al momento de la prescripción del tratamiento. Aun existiendo un desequilibrio psicológico de parte del peticionario, a partir del cual se pudiese concluir una agresividad especial contra sus semejantes, ésta no parece ser una razón para excluir al paciente de la posibilidad de opinar acerca del tratamiento que prefiere. El peticionario está capacitado para decidir la suerte de su propio cuerpo y para asumir las consecuencias que su decisión acarree en su estado de salud.

De igual forma, la Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T-411/94), nos habla sobre el derecho a la salud:

- El derecho a la salud es irrenunciable, y por tanto carecen de fundamento legal pretensiones tales como las que constan en el expediente, relativas a la presión de ciertos grupos religiosos sobre sus miembros para no recibir los tratos mínimos razonables que la salud y derecho a la vida exigen, como bienes irrenunciables e inalienables por ser inherentes a la naturaleza humana.

Ahora bien, encontramos tácitamente como la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia en mención implica a la vez el libre desarrollo de cultos:

- La señora era titular de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de cultos y, según la fe que profesaba, debía rehusarse a que se le practicaran transfusiones de sangre, de modo que, siendo plenamente capaz, no era dable que a través de una orden impartida por el juez constitucional de tutela se contrariara su voluntad, manifestada por demás en forma

consciente y reiterada y habiendo optado por la opción de que se le aplicara un tratamiento médico alternativo que a su juicio no contrariaba su fe.

La Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T-052/10), ahonda sobre este tema del libre desarrollo de la Salud, siendo además la más actualizada en cuanto al tema, sin embargo, veremos las opiniones de las otras jurisprudencias.

Esta Sentencia en mención habla del criterio que establece la Corporación para establecer las reglas para determinar las situaciones en que es procedente inaplicar normas legales o reglamentarias del Plan Obligatorio de Salud que excluyen determinados medicamentos, procedimientos y servicios:

- (i) que la exclusión afecte los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado; (ii) que el medicamento o tratamiento no sea sustituible por uno de los contemplados en el POS o no tenga sustituto efectivo; (iii) que el medicamento o tratamiento sea inaccesible al paciente por razón de su ingreso o por no tener acceso a otro sistema o plan de salud especial o complementario; (iv) que haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante. En consecuencia, descarta que pueda justificarse la negativa al suministro del medicamento por la sola circunstancia de no hallarse incorporado en el POS. No obstante, la autorización del medicamento o tratamiento no incluido en el POS debe ajustarse a las reglas jurisprudenciales descritas. (p. 1)

Punto de referencia para tener en cuenta al entrar en choque dos derechos fundamentales como lo son el derecho a la salud y el de la libertad de cultos.

De igual forma desarrolla la Cláusula General de la Libertad, que a mi parecer es importante citarla, para el libre desarrollo:

- El preámbulo de la Constitución establece como voluntad del Estado Colombiano la de asegurar a sus integrantes la *libertad*; por ende, dicho objetivo tiene fuerza vinculante y se estructura como criterio de interpretación, obligatorios por ende para cualquier operador jurídico. En desarrollo del postulado anterior, el artículo 2° constitucional señala como fin primordial del Estado el hecho de que las autoridades de la República – entre ellas los jueces – protejan a las personas en sus *libertades*. Pues bien, teniendo claro los precedentes contenidos axiológicos de la Constitución - imperativos y vinculantes en nuestro Estado Social de Derecho - el artículo 13 también constitucional, establece la llamada cláusula general de libertad, es decir la manifestación expresa según la cual las personas nacen libres y deben gozar de su libertad.

Así pues, como se refirió anteriormente la libertad de cultos no es solo un derecho, si no como lo pudimos observar en el análisis de la Sentencia T-411/94, también puede presentarse como una libertad que es superior al derecho de la Salud y que por lo anterior puede ser una razón de peso para no aplicar un procedimiento a un paciente.

De igual forma, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-659/02), nos habla:

- En la primera providencia, se analizó el caso de los padres de una niña de diez meses de edad cuyos padres se negaron a que ésta fuera hospitalizada para tratar de superar los graves problemas de salud que afectaban seriamente a la menor y comprometían su vida, porque el culto evangélico que profesaban se lo impedía. En esa oportunidad,

fue enfática la Corte en determinar la absoluta procedencia del amparo porque primaba el derecho a la vida de la menor indefensa frente a las creencias religiosas de sus padres.

Y de igual forma agrega que:

- Sin embargo, en el presente caso, la decisión de no permitir que se le hiciera transfusión de sangre alguna, provino de una mujer mayor de edad y plenamente capaz, y, sobre esa base, reitera esta Sala de Revisión el criterio expuesto por la Corte en la Sentencia T-474 de 1996 en cita, según el cual, en el Estado Social de Derecho, que reivindica al hombre como individuo libre y autónomo, incurso en continuo proceso evolutivo, epicentro de la organización política, fin y no medio de las acciones del Estado, el consentimiento del paciente se erige como manifestación expresa del principio constitucional que reconoce en él un ser razonable, dotado de entendimiento que posibilita la realización de su libertad, pues es su "razón" la única que puede válidamente determinar, previa información sobre las características y posibles consecuencias de un determinado tratamiento médico, si lo acepta o no, decisión que será legítima y constitucional siempre que provenga de un individuo plenamente capaz y que con ella éste no incumpla con la obligación que tiene de brindarse a sí mismo el cuidado integral que su persona requiera, o con el deber de no infringir con sus decisiones daño a terceros o a la colectividad. Habilitar al médico para imponerle su criterio al paciente, sería tanto como despojar al individuo de su autonomía, trasladándola a otro en razón de su calificación profesional, lo que es inadmisibles en la concepción de hombre que subyace en este tipo de organización política.

- Así las cosas, la libertad de Cultos y señalado por nuestro Estado Democrático y Constitucional es la libertad como cláusula general. En este orden de ideas, dicha libertad así comprendida tiene diferentes facetas constitucionales que permiten especificar el contenido de la misma; por tanto, encontramos el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de escoger profesión y oficio, la libertad de locomoción, la libertad de religión o cultos, la libertad de expresión, la libertad de información; entre otras.

La Constitución Política (CP, art. 19) consagra, como fundamental, el derecho de libertad religiosa. Es una emanación del derecho de libertad de conciencia constitucionalmente reconocido (CP, art. 18) que, entre otros bienes, protege a las personas en sus creencias frente a cualquier imposición de obrar en contra de ellas; del mismo modo, es expresión del derecho de libre desarrollo de la personalidad (CP, art. 16) ya que cada ser humano goza de autonomía para desarrollar su plan de vida a partir de cosmovisiones y conceptos existenciales fundados en credos religiosos. Pero el derecho de libertad religiosa trasciende el ámbito de la conciencia y se concreta en la facultad de profesión pública y difusión social de religiones, sobre la base de la igualdad de confesiones e iglesias y la libertad de cultos que traducen las ideas religiosas profesadas (CP, art. 19). La Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T052/10).

Así las cosas, varias sentencias a han abarcado el tema de la salud y la libertad de cultos y cómo en algunos casos ha primado el derecho fundamental de la Libertad religiosa como es el caso de la Sentencia T 659/02 previamente citada:

- La señora era titular de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de cultos y, según la fe que profesaba, debía rehusarse a que se le practicaran transfusiones de sangre, de modo que, siendo plenamente capaz, no era dable que a través de una orden impartida por el juez constitucional de tutela se contrariara su voluntad, manifestada por demás en forma consciente y reiterada y habiendo optado por la opción de que se le aplicara un tratamiento médico alternativo que a su juicio no contrariaba su fe.

Afirmó la juez que el amparo resultaba improcedente porque no se daba ninguno de los supuestos para que procediera contra particulares. Agregó que se trataba de proteger el derecho a la vida de la demandada, el cual, se encontraba amenazado por una “apreciación subjetiva” del accionante, en razón de las convicciones religiosas de su esposa, y esa situación no era susceptible de manejo o manipulación por medio del amparo constitucional pues se violarían otros derechos fundamentales que le asistían a la demandada, como eran su libertad de conciencia, de cultos y el libre desarrollo de su personalidad, y menos si se trataba de una decisión adoptada por una persona plenamente capaz y su manifestación de no ser “receptora de sangre” estaba autorizada por la Ley, según el artículo 50 del Decreto 1571 de 1993. Concluyó que primaba la decisión adoptada por la señora AGUDELO HURTADO conforme a su credo religioso, sin que fuera lícito obligarla a comportarse conforme a los criterios de su esposo o de su familia.

Por otro lado, encontramos que la Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T- 411/94) se demuestra que el derecho la vida que vendría de la mano de la salud prima sobre la libertad religiosa y de culto:

- Es inconcebible que, en aras de la libertad religiosa, una persona pase sobre el derecho de otra. No puede así excluirse de la protección del Estado y de la sociedad a un menor so pretexto de respetar las creencias religiosas de sus padres por más acendradas que éstas se manifiesten. Jurídicamente es inconcebible que se trate a una persona -en el caso sub examine una menor- como un objeto de los padres, pues su estatuto ontológico hace que se le deba reconocer, en todo momento, el derecho a la personalidad jurídica, la cual comporta la titularidad de los derechos fundamentales, y principalmente de los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad. Las creencias religiosas de la persona no pueden conducir al absurdo de pensar que, con fundamento en ellas, se pueda disponer de la vida de otra persona, o de someter a grave riesgo su salud, y su integridad física, máxime cuando se trata de un menor de edad, cuya indefensión hace que el Estado le otorgue una especial protección.

2.2 OBLIGACIONES LABORALES Y LIBERTAD RELIGIOSA.

Desde la parte laboral también podemos denotar como afecta las creencias religiosas, pero ya en un ámbito de sector salud, es decir como clínicas, EPS y demás, sobre esto encontramos varias sentencias que se han referido a lo anterior.

Así las cosas, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia 327/09), nos dice al respecto que:

- De esta línea de Jurisprudencia puede concluirse lo siguiente: (i) el derecho a la libertad de conciencia y de cultos implica no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio público y divulgación, (ii) los conflictos entre la libertad religiosa y algunos derechos patronales como la determinación del horario, debe resolverse bajo el principio de minimización de los límites a esta libertad. En efecto, el derecho fundamental a la libertad religiosa de toda persona, incluye la protección de guardar un día de descanso para la adoración de Dios cuando ésta constituya un elemento fundamental de la religión que se profesa y la creencia de la persona es seria y no acomodaticia. Así, esta garantía no puede ser desconocida por el patrono imponiendo horarios de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su alcance y (iii) teniendo en consideración que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabbath para los mismos, esta garantía no puede supeditarse a un acuerdo previo de las partes.

Así pues, lo que se busca es:

- En la presente ocasión, corresponde a la Sala determinar si se desconoce el derecho a la libertad de conciencia y de cultos por parte de un empleador, al despedir a una persona por su imposibilidad de laborar los días sábados, en razón de pertenecer a una confesión religiosa, la Adventista del Séptimo Día en este caso, en la que sus miembros consagran ese día a su oficio religioso.

Para el efecto, se estudiará el contenido del derecho a la libertad religiosa consagrado en nuestra Carta Política y se reiterará la posición de esta Corporación en relación con la garantía de los miembros de la Iglesia Adventista a disfrutar el día sábado como día de culto.

Libertad Religiosa y Los Convenios Internacionales, ahora bien, respecto a los pactos y convenios internacionales relacionados con el tema de la libertad religiosa, es importante señalar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la libertad de cultos en el artículo 18, tal y como ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - Pacto de San José de Costa Rica-, en su artículo 12. El artículo 18 del Pacto señala que 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Así mismo, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra: 1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho

implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En estos mismos términos ha sido tratado el derecho a la libertad religiosa por parte de los organismos y Tribunales Internacionales. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Olmedo Bustos y otros contra el Estado de Chile, en Sentencia del 5 de febrero de 2001, dijo que esta garantía fundamental se constituye en una de las bases del Estado moderno y “permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida.

De la misma forma, el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 22 de 1998 dijo que el ámbito del derecho a la libertad religiosa comprende el de tener o adoptar una religión o unas creencias comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por

otras o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias, comprendidos el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones penales para obligar a creyentes o no creyentes a aceptar las creencias religiosas de quienes aplican tales medidas o a incorporarse a sus congregaciones, a renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las políticas o prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos, como, por ejemplo, las que limitan el acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. La misma protección se aplica a los que tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso.

Como puede entonces concluirse, el ordenamiento internacional protege el derecho de conciencia y el de la libertad religiosa, no sólo desde su faceta pasiva, sino que busca que los Estados garanticen y remuevan los obstáculos que obstruyen las manifestaciones externas de dicha garantía.

Esta misma sentencia que hemos analizado involucra una Iglesia Adventista, concede a sus creyentes como día de descanso laboral, el sábado:

- La Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una organización religiosa cristiana fundada oficialmente en los Estados Unidos de América. Ésta iglesia celebró con el Estado colombiano un convenio el 2 de diciembre de 1997, aprobado a través del Decreto 345 de 1998. La Iglesia Adventista profesa la creencia de la consagración del día sábado (Sabath) a la adoración del Señor. Hace la siguiente declaración:

El benéfico Creador descansó el séptimo día después de los seis días de la creación, e instituyó el sábado para todos los hombres como un monumento de su obra creadora. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua de Dios del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Lucas 4:16; Isaías 56:5-6; Isaías 58:13-14; Mateo 12:1-12; Éxodo 31:13-17; Ezequiel 20:12, 20; Hebreos 4:1-11; Deuteronomio 5:12-15; Levíticos 23:32; Marcos 1:32).

Por tanto, es claro para esta Sala que las convicciones de todo miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día incluyen el considerar el día sábado para la adoración al Señor. En otras palabras, este precepto se constituye en una de sus principales creencias y festividades, y una de sus principales prácticas religiosas. Por lo tanto, debe protegerse esta práctica por estar vinculada a la libertad de religión y de cultos.

La importancia de esta creencia se deduce igualmente, del Convenio suscrito con el Gobierno por las Iglesias Cristianas, de un artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde se contempla la posibilidad de guardar el Sabbath. Dice la norma con relación al trabajo:

Artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo Día

- Con el fin de hacerse efectiva la libertad religiosa y de cultos establecida en el artículo 19 de la Constitución Política, el literal b del artículo 6° de la Ley 133 de 1994:
 - a) El descanso laboral semanal, para los fieles de la iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo día de precepto o fiesta de guardar sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado en sustitución del que establezcan las leyes.
 - b) En relación con el ejercicio de creencias y fiestas religiosas, esta Corporación ha estudiado el alcance de este derecho cuando entra en conflictos con otros como la autonomía universitaria y las facultades patronales de imponer horarios de trabajo. A continuación, se hará referencias a las decisiones más relevantes para el caso en estudio.

De igual forma la Corte Constitucional de Colombia, (Sentencia T-982), nos habla:

- ... en un caso muy similar al ahora planteado, la Corte conoció sobre una tutela instaurada por una creyente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que había sido despedida de la empresa donde trabajaba por cuanto no había acudido a trabajar los días sábados, como había dispuesto el patrono. La actora manifestaba que, con el objeto de poder cumplir con sus deberes religiosos, había solicitado en varias ocasiones que le permitieran compensar las horas de trabajo del sábado en otro día de

la semana, pero su solicitud había sido denegada y fue despedida sin justa causa. La Sala de Revisión, aplicando el juicio de razonabilidad, consideró que la decisión de la empresa de imponerle la obligación de trabajar el día sábado era una afectación grave al derecho a la libertad religiosa. Además, estimó que, si bien la empresa estaba autorizada por la ley para fijar el horario de trabajo de sus empleados, en este caso la medida era irrazonable y desproporcionada. Por este motivo ordenó el reintegro de la actora y la reasignación por el patrono de las horas de trabajo del sábado en otro día de la semana.

Ahora, sobre la Libertad Religiosa y el deber de Trabajar, la misma Sentencia, nos dice que no puede aceptar la Sala una interpretación según la cual, el goce efectivo del derecho constitucional fundamental de la accionante dependa de un acuerdo entre ella y su empleador. A la luz de la Constitución y los tratados citados, es preciso reconocer que dentro del ámbito de protección del derecho de la accionante se encuentra la posibilidad de observar el sabath. El objeto del acuerdo entre las partes, entonces, es para que el empleador y trabajador decidan cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se recuperará el tiempo en el que la persona no puede trabajar, debido a que ejercita su derecho a consagrar el sábado a Dios. El acuerdo tiene por objeto hacer efectivo el derecho sin que se perturbe la organización empresarial, es decir, conciliar la libertad religiosa con el deber de trabajar, según las circunstancias de cada empresa. Esta es la interpretación conforme a la Constitución.

La afectación que en este caso se hace del derecho a la libertad religiosa es grave, a pesar de ser el resultado del ejercicio de la facultad legal del empleador para fijar el horario de sus trabajadores. Como lo dice el propio texto legal que da sustento a dicha facultad, en ejercicio de ella no puede afectarse “el honor, la dignidad y los derechos del

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.

La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta. Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Si esto es así sería incongruente que el ordenamiento de una parte garantizase la libertad religiosa, pero, de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que pertenece al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que refuerza si se quiere aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas.

La interpretación de la normatividad jurídica, cuando se hace para aplicarla a un caso concreto, y especialmente cuando en él se alega la vulneración de derechos fundamentales, trasciende el tradicional ejercicio de la subsunción y se extiende y cumple cuando el juez logra con sus decisiones, no sólo imponer el cumplimiento de la ley, sino impartir justicia, entendida ésta de acuerdo con la concepción pública que la sociedad tenga de la misma y que subyace en el ordenamiento superior.

En esa perspectiva, la interpretación de las normas que conforman el derecho laboral, individual y colectivo, ha de efectuarse por parte del operador jurídico, teniendo siempre presente el carácter instrumental que ellas tienen, en un contexto en el que prevalecen los principios de dignidad de la persona, igualdad y pluralismo y los derechos fundamentales de la misma, entre los cuales, cuando se ubica al sujeto en espacios en los cuales éste desarrolla relaciones de carácter laboral, cobran singular importancia los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

2.3 VIDA Y RELIGIÓN.

Pero entonces qué pasa cuando la libertad Religiosa, entra en un conflicto con otro derecho fundamental como lo es el de la vida, aquí entonces podemos ver como se pronuncia la corte al respecto de practicar o no una cirugía, que va en contra de sus creencias religiosas pero que sin esta la persona muy posiblemente muera.

La Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T 823/02) nos habla:

- Teniendo el derecho a la vida un carácter prioritario y el derecho a la salud una connotación irrenunciable, no es admisible que, so pretexto de aplicar una determinada doctrina, ciertos grupos religiosos pretendan limitar el acceso de sus fieles a la ciencia médica, a las intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos terapéuticos indispensables para proteger sus derechos fundamentales. Ello, en contraste con la posición asumida por dichos credos de dar prevalencia a determinados procedimientos que mejor se ajustan a sus creencias espirituales, pero

que resultan carentes de respaldo científico y que pueden llegar a ser potencialmente inseguros para salvaguardar la salud y la vida de las personas. En efecto, la Corte ha sostenido que el derecho a la vida constituye un valor superior e inviolable que se funda en un presupuesto ontológico para el goce y la ejecución de los demás derechos de carácter fundamental, y así lo han reconocido varios instrumentos internacionales de derechos fundamentales. De acuerdo con los presupuestos anteriormente fijados, la Sala concluye que en caso de existir contradicción entre las decisiones que una persona adopta en virtud de su culto o religión y el derecho fundamental a la vida con todo lo que él comporta, debe prevalecer este último como derecho prioritario e inviolable.

La protección otorgada por el Estado al bien jurídico fundamental de la vida, no se agota con el compromiso de velar por la mera existencia de la persona, sino que involucra en su espectro garantizador a los derechos a la salud y a la integridad personal (física y Psíquica) como componentes imprescindibles para permitir el goce de una vida digna.

A partir del reconocimiento de la libertad y autonomía de hombre y en aplicación de sus atributos de autodeterminación y disponibilidad, surge el mandato imperativo de la ética médica, según el cual: 'nadie puede disponer sobre otro. Dicho precepto normativo exige el consentimiento informado del paciente como requisito sine quo non para adelantar cualquier tipo tratamiento clínico que exija el mejoramiento de un estado patológico. Al respecto, la Ley 23 de 1981 (Código de ética médica) determina que: ...el médico debe considerar y estudiar al paciente como persona que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus características individuales y ambientales, y adoptar las medidas curativas y de rehabilitación

correspondientes... De modo que: ...Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente... Es posible concluir que cualquier tipo de tratamiento, sea de carácter ordinario o invasivo, exige el consentimiento idóneo del paciente (bien sea manifestado de manera expresa o de forma tácita), so pena de incurrir en una actuación ilegal o ilícita susceptible de comprometer la responsabilidad médica. Sin embargo, existen situaciones excepcionales que legitiman a dichos profesionales para actuar sin consentimiento alguno, en acatamiento básicamente del principio de beneficencia. A saber: (i) En casos de urgencia, (ii) cuando el estado del paciente no es normal o se encuentre en condición de inconsciencia y carezca de parientes o allegados que lo suplan y; (iii) cuando el paciente es menor de edad.

Encontramos entonces que dentro de la misma Sentencia denotan el ámbito del derecho a la libertad religiosa y sus alcances:

- Esta Corporación ha reconocido que existe una tendencia natural en los hombres y en los pueblos a exteriorizar sus creencias espirituales (no necesariamente teológicas) encaminadas a idear una concepción ascendente del bien y del mal. Dichas creencias generalmente se vinculan a los mandatos de un ser preeminente o superior que otorga premios o castigos para aquéllos que obren según sus preceptos o se aparten de sus postulados. Por esta razón, el hombre como un ser proyectivo, estimativo y temporal ajusta su conducta a los cánones de una determinada religión en aras de obtener la satisfacción de una vida plena, trascendente y espiritual. A partir de esta tendencia

natural, la Constitución Política en sus artículos 18 y 19 en concordancia con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra el derecho a la libertad religiosa.

Este derecho ha sido concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquél que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, descreer o no creer en una determinada religión como medio de separación entre lo sagrado y lo profano, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas, tal y como, lo disponen, entre otros, los artículos 12 y 18 de los citados instrumentos internacionales de derechos humanos.

Precisamente, en relación con esta materia, la Corte ha sostenido que: ...En la esfera de su interioridad inalienable, cada [persona] resuelve con autonomía aquello que habrá de configurar su fe religiosa, su concepción sobre la divinidad, los principios de su comportamiento frente a ella y su aceptación o rechazo a los símbolos que la representan. En el campo de esta libertad hay lugar, inclusive, para no creer en nada, si tal es el resultado del proceso interior mediante el cual se fija la posición de la persona frente a los temas espirituales.

En este orden de ideas, si bien no existe una religión, ideología o creencia oficial del Estado colombiano; éste no puede asumir una postura atea, agnóstica o indiferente ante los sentimientos religiosos de su población, ya que, a partir del reconocimiento de la

libertad religiosa, asumió el compromiso de velar por la salvaguarda y protección de las distintas inclinaciones espirituales o eclesiásticas, dentro del marco pluralista y participativo propio de un moderno Estado democrático.

Desglosando la misma Sentencia en su acápite realiza un paralelo y le da la importancia al choque de dos derechos fundamentales:

- Uno de los límites impuestos al ejercicio de la libertad religiosa, lo constituye el deber específico de no abusar de los derechos propios cercenando el alcance de otros derechos fundamentales o sacrificando principios constitucionalmente más importantes. Así, el uso de un derecho debe ser razonado, proporcional y adecuado a los fines que persigue, sin comprometer la integridad de una garantía o de un principio fundamental de mayor entidad. Ante la dificultad que surge de armonizar el ejercicio de algún derecho fundamental con los distintos principios, valores y derechos previstos en la Carta, esta Corporación haya previsto la denominada tesis o doctrina de la convivencia, según la cual, éstos pueden hacerse compatibles sobre la base de que, siendo generalmente relativos, su ejercicio es lícito mientras no se lesione ni amenace otros derechos fundamentales, ni se atente contra el bienestar general.

Ahora bien, si el derecho a la vida se consolida a partir de la existencia y es indispensable '*existir*' para poder proyectarse y tomar decisiones en la vida, surge irremediabilmente la prevalencia de este derecho, toda vez que se convierte en un presupuesto imperioso para el ejercicio de los demás derechos, entre ellos, el de la libertad religiosa.

Sin embargo, la protección otorgada por el Estado al bien jurídico fundamental de la vida, no se agota con el compromiso de velar por la mera existencia de la persona, sino que involucra en su espectro garantizador a los derechos a la salud y a la integridad personal (física y Psíquica) como componentes imprescindibles para permitir el goce de una vida digna.

En resumen, como bien lo ha expuesto esta Corporación: Las creencias religiosas de la persona no pueden conducir al absurdo de pensar que, con fundamento en ellas, se pueda disponer de la vida de otra persona, o de someter a grave riesgo su salud y su integridad física (...) Por lo demás es de la esencia de las religiones en general (...), el propender por la vida, la salud corporal y la integridad física del ser humano; por ello no deja de resultar paradójico que sus fieles invoquen sus creencias espirituales (...) para impedir la oportuna intervención de la ciencia en procura de la salud (...). No existe pues principio de razón suficiente que pueda colocar a un determinado credo religioso en oposición a derechos tan fundamentales para un individuo como son la vida y la salud.

De acuerdo con los presupuestos anteriormente fijados, la Sala concluye que en caso de existir contradicción entre las decisiones que una persona adopta en virtud de su culto o religión y el derecho fundamental a la vida con todo lo que él comporta, debe prevalecer este último como derecho prioritario e inviolable.

Conforme a lo anterior, si bien es cierto que el derecho a la vida tiene un carácter prioritario frente a la libertad de cultos y que, en consecuencia, la protección en salud goza de un valor prevalente y preferente sobre las creencias religiosas, surge como interrogante:

¿si en virtud de dicho mandato constitucional, puede un médico adoptar libremente las determinaciones clínicas en favor del paciente sin su pleno consentimiento (visión paternalista de la salud) o si éste debe subordinarse a la voluntad del enfermo, dado que aquél es titular de su propia vida? (visión autonomista de la salud). Para dar respuesta a este cuestionamiento es indispensable plantear un nuevo tema objeto de estudio, es decir, ¿cuáles son los principios y reglas que gobiernan la relación médica?

En la Sentencia T 823/2002, ya citada, hace referencia al aspecto de la Relación Medico Paciente en cuanto a:

- A partir del reconocimiento de la libertad y autonomía de hombre y en aplicación de sus atributos de autodeterminación y disponibilidad, surge el mandato imperativo de la ética médica, según el cual: nadie puede disponer sobre otro'. Dicho precepto normativo exige el consentimiento informado del paciente como requisito sine quo non para adelantar cualquier tipo tratamiento clínico que exija el mejoramiento de un estado patológico. Al respecto, la Ley 23 de 1981 (Código de ética médica) determina que: ...el médico debe considerar y estudiar al paciente como persona que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus características individuales y ambientales, y adoptar las medidas curativas y de rehabilitación correspondientes.... De modo que: ...Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.... Es posible concluir que cualquier tipo de tratamiento, sea de carácter ordinario o

invasivo, exige el consentimiento idóneo del paciente (bien sea manifestado de manera expresa o de forma tácita), so pena de incurrir en una actuación ilegal o ilícita susceptible de comprometer la responsabilidad médica. Sin embargo, existen situaciones excepcionales que legitiman a dichos profesionales para actuar sin consentimiento alguno, en acatamiento básicamente del principio de beneficencia. A saber: (i) En casos de urgencia, (ii) cuando el estado del paciente no es normal o se encuentre en condición de inconsciencia y carezca de parientes o allegados que lo suplan y; (iii) cuando el paciente es menor de edad.

Por regla general, resulta que no puede ni obligarse al paciente a seguir la prescripción propuesta por el médico en contra de su voluntad y, por ende, desconociendo su consentimiento idóneo, ni ordenarse al médico a actuar clínicamente en contra de los postulados de su profesión. Por lo cual, si irremediablemente el médico y la junta estiman improcedente practicar un tratamiento en las condiciones expuestas por el paciente, éste debe buscar los servicios de quien, según su buen criterio, pueda prestarle la asistencia médica y quirúrgica necesaria conforme a los parámetros de su voluntad.

Ahora bien, la situación de urgencia se encuentra definida en el artículo 3° del Decreto 3380 de 1981, de acuerdo con el cual: Para señalar la responsabilidad médica frente a los casos de emergencia o urgencia, entiéndase por ésta todo tipo de afección que ponga en peligro la vida o la integridad de la persona y que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen médico. En este orden de ideas, es posible que pueda legitimarse una intervención médica ausente de consentimiento, cuando la vida o la integridad del paciente se encuentre en grave riesgo o peligro, verbi gracia, cuando la

persona sufre un accidente de tránsito que lo coloque en situación de inconsciencia que exija de asistencia inmediata, o también, en los casos en que la persona, sin tener la condición de enfermo terminal y estando en peligro de muerte se rehúsa a recibir la atención médica adecuada. Sin embargo, estas alternativas deben apreciarse de manera rigurosa y objetiva, es decir, muy ligadas al requerimiento de una atención inmediata para evitar un perjuicio irremediable.

A la par del citado mandato constitucional, se estructura como elemento trascendental de la relación médica, el denominado principio de capacidad técnica. Este precepto normativo implica la competencia exclusiva del médico para apreciar, analizar, diagnosticar y remediar la enfermedad del paciente, en aras de lograr su completo bienestar físico y psíquico. En efecto, es a partir del reconocimiento de la profesionalización del médico que éste adquiere capacidad técnica para ejecutar sus actos clínicos y para requerir del Estado la salvaguarda de su autonomía profesional, siempre ajustada a los mandatos de la ética médica. Dichos actos se definen como aquellos destinados a obtener la curación o el alivio del paciente, siendo clasificados por la doctrina especializada como: preventivos, diagnósticos, terapéuticos y/o de rehabilitación. Al respecto, la Ley 23 de 1981 establece como elementos del juramento hipocrático, los siguientes: " - consagrar [la] vida al servicio de la humanidad; - Ejercer [la] profesión dignamente y a conciencia; - velar solícitamente y ante todo, por la salud [del] paciente, entre otros. Ahora bien, uno de los elementos del principio de capacidad técnica, es el conocido en la ética médica como la regla de la *lex artis* o ley del arte. Por virtud de la cual, se presume que el acto ejecutado o

recomendado por un médico se ajusta a las normas de excelencia del momento, es decir, que teniendo en cuenta el estado de la ciencia, las condiciones del paciente y la disponibilidad de recursos, sus recomendaciones pretenden hacer efectiva la protección a la vida y a la salud de los pacientes.

De esta manera, el ejercicio de la *lex artis* permite elevar de forma temporal mediante conocimientos provisionales (dependen en gran medida de la evolución científica), una serie de normas técnicas y de procedimientos clínicos que son susceptibles de aplicarse de forma análoga a situaciones patológicas comunes o similares y que, son pertinentes, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los pacientes. Es, entonces, trascendente que las disposiciones técnicas que en un momento determinado adopte el médico tratante, se mantengan incólumes y sean efectivamente obedecidas por sus pacientes; sólo así el tratamiento ordenado puede lograr la bondad, idoneidad y eficacia evocada por el médico y, además, a partir de dicho presupuesto, éste estaría dispuesto a asumir las responsabilidades que su actividad profesional le impone.

Por ello, la Ley 23 de 1981 (Código de ética médica) faculta a los médicos para rehusarse a prestar un tratamiento clínico cuando "...existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión...". Una de cuyas circunstancias es: " (...) Que el enfermo rehúse a cumplir las indicaciones prescritas...". Esta causal ha sido desarrollada por el artículo 4° del Decreto 3380 de 1981, en los siguientes términos: " Con excepción de los casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios por las siguientes causas: c) Que

el enfermo se rehúse cumplir las indicaciones prescritas, entendiéndose por éstas no sólo la formulación de tratamientos sino también los exámenes, juntas médicas, interconsultas y otras indicaciones generales que por su no realización afecten la salud del paciente...

3. RELIGIÓN Y RECONOCIMIENTO O PARTICIPACIÓN.

El derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia es una de las características particulares de nuestra reciente historia política y social. En la Constitución de 1991, se estipula que Colombia es un Estado Social de Derecho y como tal desarrolla en su artículo 19 que: "... se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley..."

Posteriormente, en el año 1994, el Congreso de la República promulga La Ley 133 por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Esta ley tiene la característica de ser estatutaria, por que reglamenta un derecho fundamental.

Así, pues lo que se busca es fortalecer sus capacidades de participación ciudadana en la construcción de una política pública de libertad religiosa, de cultos y conciencia, que permita reconocer y visibilizar el aporte al bien común que hacen las Entidades Religiosas y sus organizaciones afines, y su aporte en la construcción del Estado Social de Derecho, para lo cual

entraremos a analizar, las Jurisprudencias relacionadas, con el derecho a la libertad religiosa, dentro del ámbito del reconocimiento o participación en Colombia.

3.1 CONFESIONES RELIGIOSAS.

Entre otras varias providencias, la Corte Constitucional colombiana se ha referido a este asunto en las Sentencias C-350/94 y SU-510-98.

Podríamos partir de la apreciación que hace la Sentencia C-350/94, donde nos dice que:

- El carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que ésta tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas.
- Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una

determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. Las definiciones constitucionales sobre la estructura del Estado, y en este caso particular, sobre la laicidad del Estado y la igualdad entre las confesiones religiosas, no pueden ser alterada por los poderes constituidos sino por el propio constituyente. Pero ello no significa que estos poderes no puedan tomar decisiones, con base en el predominio de las mayorías, en otros campos, puesto que ello es inherente a la dinámica democrática.

Con respecto a esto encontramos que, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia SU-510-98) nos dice:

- La Corte ha indicado que, si bien las autoridades tradicionales pueden definir las faltas y las sanciones, deben hacerlo con sujeción a los principios mínimos del debido proceso. Adicionalmente deben respetar un contenido mínimo del principio de igualdad en el sentido de que no pueden aplicar sanciones más gravosas simplemente porque la persona en ejercicio de su libertad religiosa opta por un credo distinto. Esto es desproporcionado y viola el núcleo esencial de la libertad religiosa y de la igualdad.

Además, en otro inciso la misma Sentencia expresa:

- El principio de diversidad étnica y cultural de la nación (C.P., artículo 7º) y las facultades jurisdiccionales de las autoridades tradicionales indígenas se encuentran

limitadas por lo dispuesto en la Constitución y la ley (C.P, artículo 246). En particular, considera que la protección de los derechos individuales de los miembros de una comunidad indígena tiene más valor que la protección del derecho colectivo "a mantener la singularidad cultural". Afirmar que "no es justo que so pretexto de conservar las costumbres y tradiciones indígenas como patrimonio cultural del país, propósito que respetamos, los indígenas individualmente considerados se les trate como si fueran objetos por los que hay que pensar y opinar. El principio de diversidad étnica y cultural ofrece una protección colectiva a las comunidades indígenas, pero cada indígena como ciudadano colombiano también se encuentra protegido por la Carta Constitucional cuando se trata de sus derechos fundamentales, en igualdad de condiciones que cualquier persona en el país. No es lógico que a un indígena, como ser humano pensante que es, no se le permita escoger libremente y según su convicción y conciencia, en qué y en quién desea creer, y qué desea practicar, ya que también se trata de un ciudadano colombiano con capacidad de decidir por él mismo. No es cierto que por querer ser evangélico y desear seguir a Jesucristo, el indígena deje de ser indígena. La IPUC, a través de sus pastores, se ha limitado a impartir un mensaje a quien lo desea escuchar, y quienes actualmente son cristianos han decidido voluntariamente cambiar su forma de pensar. No es la Iglesia la que causa división en la comunidad indígena, son sus autoridades quienes han decidido vulnerar sus derechos provocando la división.

Así mismo nos expresa que:

- En general, la Corporación ha entendido que los artículos 1° y 7° de la Carta Política consagran el principio de respeto a la integridad y diversidad étnica y cultural, del cual se derivan los artículos 8° (protección de la riqueza cultural de la nación), 9° (derecho a la autodeterminación de los pueblos), 10 (oficialidad de lenguas y dialectos de los grupos étnicos), 68 (respeto a la identidad en materia educativa), 70 (cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas) y 72 (protección del patrimonio arqueológico de la nación) constitucionales. A este respecto, no sobra advertir que las normas constitucionales citadas, sobre las cuales se funda la especial protección que se dispensa a las comunidades indígenas, resultan fortalecidas y complementadas por lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la O.I.T., sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.

3.2 DIVERSIDAD ÉTNICA.

En cuanto a este tema dentro de la Sentencia SU 510/1998, citada previamente, encontramos que:

- Para la Corte, el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental." La Constitución Política permite al individuo definir su identidad con base en sus

diferencias específicas y en valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y mono culturales. Lo anterior traduce un afán válido por adaptar el derecho a las realidades sociales, a fin de satisfacer las necesidades de reconocimiento de aquellos grupos que se caracterizan por ser diferentes en cuestiones de raza, o cultura. En suma, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural obedece al imperativo de construir una democracia cada vez más inclusiva y participativa y de ser consecuentes, de otro lado, en la concepción según la cual la justicia constituye un ideal incompleto si no atienden a las reivindicaciones de reconocimiento de los individuos y comunidades.

El principio de diversidad étnica y cultura otorga a las comunidades indígenas, un status especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios. Igualmente, la Carta les confiere el derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres; consagra una circunscripción electoral especial para la elección de senadores y representantes; y, les garantiza el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios.

La Corte ha señalado que las limitaciones a que se encuentran sujetos los principios de diversidad étnica y cultural y de autonomía de las comunidades indígenas surgen del propio texto constitucional, el cual determina, por una parte, que Colombia es un Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales y, de otro lado, que la autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, es decir, la capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial,

puede ejercerse conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando éstos no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Lo anterior determina que, en materia de comunidades indígenas, la Carta Política consagre un régimen de conservación de la diversidad en la unidad. Según la Corte, "sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural", afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural, como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de mayor entidad que el principio que se pretende restringir. Según la jurisprudencia, en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre." La Corporación ha aceptado que se produzcan limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas estén dirigidas a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad.

La Corte ha entendido que la consagración del principio de diversidad étnica y cultural, del cual se derivan los derechos fundamentales antes mencionados, se encuentra en una relación de tensión con el sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución, toda vez que, mientras el primero persigue la protección y aceptación de cosmovisiones y parámetros valorativos diversos e, incluso, contrarios a los postulados de una ética universal de mínimos, el segundo se funda en normas

transculturales y universales que permitirían la convivencia pacífica entre las naciones. Sin embargo, esta tensión valorativa no exime al Estado de su deber de preservar la convivencia pacífica (C.P., artículo 2º), motivo por el cual está obligado, a un mismo tiempo, a garantizar los derechos de todas las personas en su calidad de ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen de la pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos. En esta labor de equilibrio, el Estado debe cuidarse de imponer alguna particular concepción del mundo pues, de lo contrario, atentaría contra el principio pluralista (C.P., artículos 1º y 2º) y contra la igualdad que debe existir entre todas las culturas (C.P., artículos 13 y 70). Los indígenas evangélicos alegan que las sanciones que se les imponen por la comisión de faltas comunes son más drásticas de las que se aplican a miembros no evangélicos de la comunidad que cometen las mismas faltas. En este caso la Corte ha indicado que, si bien las autoridades tradicionales pueden definir las faltas y las sanciones, deben hacerlo con sujeción a los principios mínimos del debido proceso. Adicionalmente deben respetar un contenido mínimo del principio de igualdad en el sentido de que no pueden aplicar sanciones más gravosas simplemente porque la persona en ejercicio de su libertad religiosa opta por un credo distinto. Esto es desproporcionado y viola el núcleo esencial de la libertad religiosa y de la igualdad.

3.3 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.

Se podría definir también como Implementación del proceso de toma de decisiones, entre otras Sentencias, podemos encontrar que hablan sobre este tema en la C-1175/2014 y en la C-817/2011.

Así pues, La Corte Constitucional (Sentencia C-1175/2014) lo define como:

- El carácter laico del Estado colombiano hace que la Corte encuentre contrario a la Constitución la participación obligatoria (derecho de representación) de una religión en una instancia de decisión estatal. No obstante, tratándose de asuntos de interés general siguen existiendo todas las garantías constitucionales para que las confesiones religiosas y cualquier otra agrupación legítima de ciudadanos de cualquier índole, hagan uso de los mecanismos constitucionales de participación y accedan al asunto, si es que es de su interés. Lo que no implica que se establezca algún tipo de privilegio en dicha posibilidad de participación, porque el grupo sea cuantitativamente representativo en la sociedad.

El derecho de participación, que el artículo 2° de la Ley estatutaria reconoce a las confesiones religiosas, permite que los miembros de las iglesias puedan estar representados en aquellas instancias oficiales donde se definen o regulan los diversos aspectos de la cultura social intrínsecamente relacionados con la moralidad pública y la formación moral de la infancia y la adolescencia. En este sentido, dicha norma estatutaria constituye un desarrollo y una profundización del principio participativo acogido por la Constitución que nos rige. Tratándose del cine, como expresión artística y manifestación cultural, a todos los actores sociales, entre ellos a los miembros de las iglesias, les cabe el derecho de participar en las decisiones que tienen

que ver con su exhibición pública, cuando ella compromete los valores de la moralidad objetiva.

- El fenómeno de la participación democrática supone la implementación previa de un proceso (el de toma de decisiones) con un fin (un resultado imparcial), también previamente determinado. El último será establecido bajo el criterio de que la mayoría estuvo de acuerdo con dicho fin. El primero establecerá qué y bajo qué condiciones será ajustada a derecho dicha mayoría. Ahora bien, cuando dicha participación se limita a la intervención en el resultado o decisión, amparado en el supuesto peso que imprime ostentar una mayoría en la sociedad, que no es producto de proceso previo alguno que así lo determine para el caso concreto de la decisión a tomar, se pervierte la esencia de la participación democrática. Esto porque el peso y empuje que imprime el que un grupo determinado tenga gran influencia en la sociedad, en virtud de la mayoría de afiliados, no lo exime de cumplir las reglas de participación democrática, que son, como se dijo arriba, que exista un proceso preestablecido que determine las condiciones y la decisión a tomar por una mayoría, la cual a su vez se establecerá como tal solo luego de implementado el proceso democrático de toma de decisiones. Esto trae como consecuencia entonces, que dicha mayoría no esté preestablecida.

No resultaba inconstitucional que se diseñara un mecanismo de participación para atender a la manifestación de la cultura religiosa, en una instancia oficial donde se define y regula un asunto relativo a la cultura social intrínsecamente relacionado con la moralidad pública y la formación moral de la infancia y la adolescencia. Por lo anterior, la disposición acusada, entendida como referida a la posibilidad de que todas

las iglesias y confesiones religiosas oficialmente reconocidas tuvieran presencia en el Comité de Clasificación de Películas, mediante un mecanismo que permitiera la designación de un representante de las mismas, no sólo no desconocía el carácter laico y pluralista del Estado colombiano, sino que antes bien lo profundizaba, consagrando un elemento de expansión del carácter participativo de nuestra democracia.

El artículo 152 de Código Nacional de Policía, no es solo una vulneración al artículo constitucional que reconoce el derecho fundamental a la igualdad, sino además es una trasgresión al principio de democracia y participación instaurados en la Constitución Nacional, ya que excluye a la pluralidad de credos religiosos en la toma de decisiones de interés general y que se desarrollan en el ámbito cultural en el caso particular. Con lo anteriormente explicado se puede deducir fácilmente que el artículo 152 del Código Nacional de Policía, en cual se estipula la conformación del Comité de Clasificación de Películas y se da predominio a la religión católica – como si esta fuese la religión oficial del Estado colombiano -, para participar en la toma de decisiones de carácter cultural, es una evidente violación a los principios constitucionales expresos en el preámbulo de la Constitución y a los artículos 2, 13, 19 constitucionales.

Con todo, es necesario comprender la diferencia que existe entre los mecanismos de participación y demás modalidades propias de la caracterización del Estado colombiano como una democracia participativa y por otra parte los derechos propios de la representación que tal y como son entendidos por quienes solicitan la exequibilidad de la norma objeto de este control, son propias más de un estado corporativo y no de uno democrático.

Las Sociedades Democráticas, dentro de la Corte Constitucional, (la Sentencia C-817/2011), nos establece que:

- La diferencia entre uno y otro modelo es el origen de la justificación constitucional de la tolerancia religiosa. En los Estados religiosos tolerantes, el culto de las personas es un objeto autónomo de protección constitucional, en la medida en que se advierte valiosa, en sí misma considerada, la práctica de la religión. En cambio, para el Estado secular la admisibilidad de la religión se funda en que ese escenario es una expresión de la libertad del individuo de guiarse por un modelo de conducta particular, que puede o no ser religioso. Aunque el teórico estadounidense no lo plantea de ese modo, la Corte señala que el único límite predicable de dicho modelo es que no contradiga el orden público y los derechos de los demás, restricción que es propia de las distintas esferas de libertad individual.

El Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante, tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia

en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas.

Uno de los aspectos que han merecido más atención en el constitucionalismo contemporáneo es el contenido y alcance de la relación entre el Estado y la cuestión religiosa. Precisamente, puede plantearse válidamente que este tópico ha ido de la mano con el desarrollo de las democracias liberales y que, incluso, un rango distintivo que permite diferenciar las distintas fórmulas de conformación democrática del poder político es el modo de relación entre las iglesias y el Estado. Esta nodal importancia, sumada a la evidente tensión derivada de la presencia en la sociedad colombiana de un credo mayoritario, justifica que la jurisprudencia constitucional haya mostrado su interés sobre la materia en múltiples decisiones. Por ende, en la presente sección la Corte hará una recopilación de las reglas que dichas decisiones han fijado, a efectos de identificar el marco de análisis para la resolución de los problemas jurídicos antes planteados.

La forma en que los Estados resuelven su relación con los diferentes credos religiosos responde a una categorización, que oscila entre la asunción de un credo particular como propio de la Nación, hasta el carácter laico y secular de la organización política. Esta división fue evidenciada por la Corte en la sentencia C-350/94, la cual declaró la inconstitucionalidad del mandato legal que consagraba el Estado colombiano al símbolo católico del sagrado corazón de Jesús. Allí se indicó que una tipología aceptable sobre la materia no solo comprende los estados religiosos y los estados

laicos, sino que existe una gradación intermedia que reconoce los diversos niveles de intensidad de la relación entre iglesias y el Estado.

SEGUNDO CAPITULO

MAX HORKHEIMER: POLÍTICA Y RELIGIÓN

Max Horkheimer (1895 - 1973) Filósofo y sociólogo de origen judío alemán uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt. Escuela de pensamiento que planteó la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa-capitalista. Sus estudios y un profundo análisis crítico de los valores y principios subyacentes en la sociedad moderna (la llamada «teoría crítica de la sociedad»), que influenciada por las corrientes del marxismo occidental elaboro una crítica de la cultura en el contexto del capitalismo tardío.

Después de haber emigrado a EE. UU el 1933, luchó por una orientación crítico-sociológica con base filosófica. Publicó entre 1933 y 1941, algunos de sus mejores ensayos. Un grupo de ellos fue incluido en los dos volúmenes de la *Kritische Theorie* publicados por su discípulo Alfred Schmidt. En 1950 Max Horkheimer volvió a su país, alternó su actividad didáctica en Frankfurt con la que desarrolló también en la Universidad de Chicago. En 1955 fue galardonado con el Premio Goethe, y en 1960 fue nombrado ciudadano de honor de la ciudad de Frankfurt.

Juan José Sánchez, doctor de teología y filosofía, realizo su tesis doctoral sobre Max Horkheimer (*Contra la lógica de la historia. Critica de la religión y cuestión de Dios en la obra de Max Horkheimer*), publicada en Múnich en 1980. Sánchez (2000) en su libro *Anhelos de Justicia Teoría crítica de la religión*, plasma el pensamiento de Horkheimer como:

El pensamiento materialista de Horkheimer, tras el cansancio de una etapa crítica y revolucionaria; lo original está en que recoge y expresa una voz crítica sobre la presente – y previsible – evolución de la sociedad y del pensamiento que tiende a liquidar lo que siempre, no solo en esta etapa tardía, había constituido para Horkheimer el momento de verdad de la religión en cuanto a negación del mundo presente y anhelo de justicia plena.

Así mismo, Jürgen Habermas (1929) sociólogo y filósofo alemán, quien fue requerido por Adorno en la Universidad de Frankfurt en 1956, es acogido por Horkheimer y su fervor izquierdista y carácter independiente, el resultado de ello fue la colaboración en investigaciones, en el Instituto de Investigación Social, y artículos propios. Habermas (2001) describe el pensamiento de Horkheimer, en su libro *Israel o Atenas, ensayos sobre religión, teología, y racionalidad*, como:

- Viene determinado por la estremecedora experiencia histórica de aquellas ideas de libertad, solidaridad y justicia deducidas de la razón práctica, que dieron alas a la Revolución francesa, y a las que Marx dio cobro en términos de crítica de la sociedad, no habían conducido al socialismo, sino, en nombre del socialismo a la barbarie (...) un pensamiento que hasta en lo más íntimo de sus conceptos básicos está relacionado a cambios históricos ha de someterse a la instancia que representan nuevas experiencias.

Por otra parte, Hans Küng (1928) Sacerdote católico y destacado teólogo suizo, uno de los más controvertidos del pensamiento católico contemporáneo, en su obra *¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo*, escribe acerca de Horkheimer:

Poco antes de su muerte, el filósofo y sociólogo Max Horkheimer, con una claridad hasta entonces insólita en la «Escuela de Francfort», confesaba en una entrevista su aprecio resueltamente positivo de la religión y la teología como posible instrumento de crítica a las situaciones sociales injustas. Esto sorprendió a muchos que lo conocían y admiraban como filósofo marxista, crítico de ideologías, analítico de la sociedad y padre de la «teoría crítica». Sobre todo, la fórmula programática de la religión como expresión de la «nostalgia del totalmente Otro» hizo pensar a muchos que se encontraban ante un anciano que se había resignado y había perdido toda su capacidad crítica: volvía a aparecer el cliché del ateo obstinado que se convierte en el «lecho de muerte» (Küng, 1979, p. 446).

Hay que mencionar, además el concepto que Küng registra en su libro, acerca de lo que significa la religión para Horkheimer:

- Para Horkheimer la religión, en la que se concentran los deseos, anhelos y quejas innumerables hombres ante la inmensidad del sufrimiento y la injusticia, hace consciente al hombre «de que es un ser finito, de que tiene que padecer y morir, pero también de que por encima del dolor y la muerte está la añoranza de que esta existencia terrena no sea lo absoluto, lo definitivo». (Küng, 1979, p. 666).

Küng habla en su libro sobre el concepto de <<Teoría crítica>> de Horkheimer:

- La obra tardía de Horkheimer, y ya no es lícito aislar sus declaraciones sobre la religión, sino que hay que contemplarlas en continuidad con su «teoría crítica»,

compartida con Adorno. Al menos no cabe hablar de una mitigación de su anterior crítica de la religión, y mucho menos de un intento de congraciarse con las instituciones eclesiásticas. Muy al contrario, el reproche dirigido a la teología y a la Iglesia es tajante, inequívoco: la religión cristiana no ha sabido «traducir su convicción de la existencia de un Dios infinitamente bueno a la práctica de la historia que ella misma ha regido y acuñado» 6, ya que «sus representantes no han hecho creíble el supuesto de un Dios infinitamente bueno y no han actuado en el sentido de un Creador y Hacedor divino, sino que han perpetrado múltiples infamias y crueldades que han puesto la religión al servicio de los malos instintos del hombre. Tristes ejemplos de esto son las cruzadas y las quemas de brujas. El despecho del hombre hundido en situaciones indignas ha sido desviado –con ayuda de la religión establecida-- hacia víctimas indefensas y otros objetos de agresión. Esta praxis ha causado a la religión graves perjuicios» (Küng, 1979).

Así mismo, podemos encontrar que el escritor Esteban López González, abogado, filósofo y con amplios estudios en las Escrituras y de teología, de nacionalidad española, en su blog nos proporciona una interesante interpretación sobre el significado de la religión para Horkheimer (E López, 2017, 30 de mayo):

- Parte del anhelo de justicia cumplida, característica originaria del hombre. Una justicia que no se da ni puede darse en esta sociedad y en su historia milenaria: que trasciende no solo esta sociedad, sino todas las utopías intramundanas. En ese sentido, para Horkheimer no carece de importancia que exista o no un Dios, que yo crea o no

crea en él. Ello es importante, porque las acciones y actitudes humanas, en el fondo, están determinadas teológicamente.

Es decir, para Horkheimer todo lo que tiene relación con la moral se reduce en último término a teología: Desde la perspectiva inicial del positivismo es imposible deducir una política moral. Bajo un punto de vista puramente científico, el odio no es peor que el amor... No hay ningún razonamiento lógico irrefutable por el que yo no deba odiar, cuando de ello no se deriva para mí perjuicio alguno en la vida social.

Habría que incluir también, el pensamiento de la socióloga e investigadora científica, de nacionalidad argentina, María Pilar García Bossio, docente de la facultad de ciencias sociales, de la Universidad Nacional de la Plata, en su artículo; *Anhelo de justicia. Horkheimer, el rol de lo religioso en la teoría crítica y el potencial emancipador*, hace una reflexión del pensamiento de Horkheimer en el presente y la interpretación de religión para Horkheimer (M García, 2016, p.3):

- En este sentido, preguntarnos por el rol de ese anhelo en la teoría crítica no supone un retorno a formas cristalizadas de lo religioso como anulación de cualquier forma de emancipación. Por el contrario, Horkheimer pone su mirada en lo teológico de una forma que arremete contra lo políticamente correcto y que cuestiona su definición misma, para encontrar en una revisión no dogmática de la esperanza religiosa el germen del anhelo y la justificación del amor como sacrificio. Desde allí, sin abandonar una mirada pesimista sobre un mundo cada vez más administrado donde la justicia se constituye a sí mismo como un imposible, es que busca no obstante intentar lo bueno.

A continuación, se recopilarán algunos de los conceptos y pensamientos del filósofo Horkheimer uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica en su libro, *Anhelos de Justicia Teoría crítica y religión*, edición de Juan José Sánchez (2000).

1. LA VERDAD DE LA RELIGIÓN.

El siguiente punto, trata de recopilar el pensamiento de Max Horkheimer sobre ¿Qué es la religión?

El filósofo hace una composición entre filosofía e investigación social, acerca del anhelo de justicia en la teoría crítica, es un impulso que tiene el hombre de cambiar su realidad y en dónde él es el único que tiene el poder para transformar los fenómenos que afectan una mejor calidad de vida.

Este opina que en el más pequeño gesto de vida se encuentra la religión. Para Horkheimer la religión se divide en: el buen sentido y el mal sentido (M, Horkheimer, 2000, p. 226):

- El buen sentido: El inextinguible impulso, sostenido contra la realidad, de que está debe cambiar, de que se rompa la maldición y se abra paso a la justicia. Donde la vida está, hasta en el más pequeño gesto, bajo este signo, allí hay religión. (...) El mal sentido: Este mismo impulso pervertido en afirmación, en proclamación, y por tanto en transfiguración de la realidad a pesar de todos sus flagelos; es la vana mentira de que el mal, el sufrimiento, el horror tiene un sentido, bien gracias al futuro terreno, bien al futuro celestial.

Adicionalmente, hace un paralelo del significado de la religión, cuando afirma que: “el hombre no está en el mundo, para soportar las torturas, malos tratos, e injusticias pues no se puede afirmar que después de la muerte, hay un paraíso celestial”.

Hay que mencionar, además el siguiente análisis que él hace acerca del significado de religión y las situaciones sociales (M, Horkheimer, 2000, p. 170):

- Los mártires del cristianismo soportaron más fácilmente todos los terribles tormentos porque creían que su existencia terrena era un breve pasaje hacia la felicidad eterna de la que gozarían personalmente. (...) los mártires judíos ofrecieron sus vidas no para su salvación propia, sino para la salvación de su pueblo.

En otras palabras, la religión debería ser la búsqueda de equidad, esperanza, de una vida con mejores oportunidades, con anhelos de una existencia con mejor calidad de vida. Por otra parte, la religión ha sido la cohibición, de libertad, de pensamiento y de justicia, desde tiempos antiguos en donde el poder encontró en la religión la forma de emancipar la sociedad y así tener el control, ha sido tan grande su dominio que ha destruido culturas enteras, llevándolas a la desesperanza terrenal, pero a la creencia de un descanso eterno en el paraíso.

Otra de las reflexiones a las cuales se puede llegar, acerca del significado de religión, es que esta no hace parte de Otro, es más un que hacer por el otro, es decir que podemos hacer por el sujeto o los sujetos, no esperando una retribución es sentir la satisfacción del alivio del sujeto.

1.1 UNA PRIMERA INTERPRETACIÓN.

El filósofo Horkheimer manifestó y mostro tener una sensibilidad para entender los sufrimientos inevitables, de los individuos, teniendo en cuenta que desde muy temprano este intelectual alemán logró captar la tragedia de la modernidad occidental, la injusticia, la irracionalidad, el autoritarismo, los conflictos que incluso hoy, en la era de la globalización se creen superados Horkheimer sostuvo: “por eso expresamente de <<anhelo>> (*Sehnsucht*), no de nostalgia o añoranza (*nachtrauern*), cuando se refiere a ese <<impulso>> o ardiente deseo que está en la base de su reivindicación de la religión” (M, Horkheimer, 2000, p. 29)

Se debe agregar, que Horkheimer hace referencia al anhelo como un grito desesperado de nostalgia, esperanza, añoranza por una vida, con mejores oportunidades, con equidad de justicia, de economía, en donde el hombre luche por sus derechos sus anhelos de una existencia con mejor calidad de vida: “además, un anhelo no de quien lo reivindica y piensa, sino de quien lo expresa como grito de promesa y de esperanza: de <<los sujetos torturados que no son capaces de concebir que la redención del mal infinito sea... inconcebible>> (M, Horkheimer, 2000, p. 237)

Por esta razón afirma (M, Horkheimer, 2000, p. 30):

- Un anhelo, por tanto <<rescatado>> del mundo oprimido y silencioso de las víctimas, de la historia del sufrimiento, <<arrancado>> a la realidad dominante y <<sosteniendo>> contra ella: no un mero deseo piadoso, siempre fácil y de fondo egoísta, sino un anhelo que tiene que ganarse desde y en una praxis que niegue la

realidad injusta domínate, que rompa con la lógica de la historia y haga posible el cumplimiento de la esperanza truncada de las víctimas. Un anhelo, pues, practico y contrafáctico, que brota, se despliega y se sostiene en la misma praxis y a contracorriente de la lógica de la historia, un postulado de la razón crítico-práctica en el mejor sentido kantiano, y de la razón en el mejor sentido ilustrado, (...) Un anhelo, en definitiva, que solo es verdadero cuando está inequívocamente bajo el signo de la resistencia y del inconformismo, no de la resignación y la añoranza.

Por otra parte, es importante explicar el término (un anhelo) de Horkheimer: “un anhelo, del anhelo de que el verdugo no triunfe sobre la víctima inocente” (M, Horkheimer, 2000, p. 169).

En una entrevista realizada a Horkheimer, en el año de 1970, hace referencia de cómo en la teoría crítica la teología se utiliza con una expresión de <<un anhelo>>. El filósofo responde (M, Horkheimer, 2000, p. 169):

- Una vez más mi pregunta, señor Horkheimer ¿Qué significa aquí teología? M.H.: (...) Teología significa aquí la conciencia de que este mundo es un fenómeno, que no es la verdad absoluta, que no es lo último. Teología es (...) la esperanza de que la injusticia que atraviesa este mundo no sea lo último, que no tenga la última palabra. (...) yo diría más bien: expresión de un anhelo.

Más aun, cuando el contexto social del mundo es percibido con pánico, se debe tener en cuenta que el intelectual alemán, vivió de primera mano la llegada del nazismo y fue obligado a trasladarse a Estados Unidos para salvaguardar su vida. En una de las entrevistas realizadas a Horkheimer le hacen referencia a crear una nueva religión, a lo cual el afirma: “No podemos fundar una nueva religión, que continúe existiendo las antiguas confesiones y que sigan actuando en el reconocimiento de aquellas que expresan un anhelo y no un dogma” (M, Horkheimer, 2000, p. 194)

Así pues, para Horkheimer, la solución no es crear una nueva religión, se podría decir que es hacer una deconstrucción de ella, de las ideologías teológicas y construir unas nuevas, que contribuyan a garantizar justicia, la no repetición, pero sobre todo el no olvido de las víctimas de los fenómenos sociales, e impartir un equilibrio en la sociedad. Pero esto no es así en la siguiente cita filósofo hace una aclaración (M, Horkheimer, 2000, p.206):

- Todo lo contrario. Yo le apunto que la teología se agota aún más. Yo dije que la teología establece compromisos, pacta con la ciencia, como si la ciencia pudiera decir algo más que la tierra es un microátomo, una esferita con capa de moho flotando en el universo infinito.

Dicho brevemente Horkheimer, utiliza el termino <<un anhelo>> para realizar una fuerte crítica a la religión, reconoce momentos de verdad en la lógica de la historia, pero, sobre todo, como rescate del individuo y el cumplimiento de justicia para con las víctimas, aunque la

expresión <<anhelo>> suena como una palabra afligida, Horkheimer la utiliza como una resistencia hacia el poder.

Horkheimer hace referencia a la teología como la ciencia, que debería ocuparse del anhelo, la esperanza del ser, como individuo, como colectivo en una familia, una sociedad, en donde este aprende, evoluciona. Pero de hecho para Horkheimer ha tomado otro camino y su eje se está viendo comprometido y tiende a desaparecer, por lo que Horkheimer, afirma haberse dejado influenciar por la ciencia.

Por otro lado, el intelectual alemán es atraído por la esperanza que le generaba términos de justicia, libertad e igualdad, entre otros sentidos que él mismo aduce como: “La idea de justicia, la idea del bien la idea del <<no-ejercer-simplemente-la-fuerza>>, la negativa a perseguir inocentes: todas esas son ideas que se encuentran en una verdadera teología” (M, Horkheimer, 2000, p. 212). Una justicia que no solo hace parte de la política materialista y de la ilusión (anhelo) de las víctimas.

Para Horkheimer, desde luego, la religión <<en el buen sentido>> (M, Horkheimer, 2000, p. 31):

- El anhelo de justicia plena y universal – está ligada intrínsecamente a una praxis de resistencia y de solidaridad. De lo contrario se pervierte en religión <<en el mal sentido>>, en ilusión, ideológica o legitimación del dominio y en búsqueda egoísta de la propia seguridad y felicidad.

Hay que mencionar, además el argumento que Horkheimer, sostiene que el núcleo de la religión es la idea de justicia que traducido teológicamente se ha comprendido como el «Amor al prójimo» afirmando que (M, Horkheimer, 2000, p. 217):

- La conciencia de la injusticia procede (...) en último término de la teología, de la religión; pues allí se dice: “Ama al Próximo como a ti mismo”, allí se establece la justicia como una exigencia. Al hombre como tal, independientemente de todo esto, le es, en principio, tan originaria la injusticia como la justicia.

Considerando que, la persona que no cree en Dios, pero trata al otro con amor, es también una persona religiosa. Se debe agregar que para Horkheimer: “El anhelo de justicia, no pertenece a quien lo reivindica, sino a las víctimas, y es en favor de ellas, del cumplimiento de su felicidad por lo que se reivindica en la praxis” (M, Horkheimer, 2000, p. 34).

Por consiguiente, la justicia para Horkheimer es vista como un imposible, desde su filosofía pesimista, en donde la ambición, dominación de un mundo administrado por las altas clases capitalistas no permiten la conciencia de la justicia.

Antes de dar el concepto de lo totalmente Otro, es importante conocer si en el proceso de la teoría crítica existe un pensamiento teológico, respuesta que encontramos en la entrevista de 1970 realizada a Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 177):

- La teoría crítica contiene, al menos, el pensamiento de lo teológico, de lo Otro. Ello no significa que se niegue al empeño por crear una sociedad mejor, más justa; solo implica el convencimiento de que incluso un ordenamiento justo, que, como he dicho repetidamente, se paga con la limitación de la libertad, no es lo último, sino solo el ordenamiento plausible de lo existente.

La expresión, <<anhelo de lo totalmente Otro>> se dio a conocer en una de las entrevistas más famosas de Horkheimer, este término, hace referencia a su apreciación que los hombres son finitos y el mundo en el cual se desenvuelven es relativo, mientras que la imagen de Dios coincide con lo infinito y absoluto desde este punto de vista tanto Adorno como Horkheimer no hablan de Dios sino de lo <<totalmente Otro>>. (M, Horkheimer, 2000, pp. 29, 173, 169, 194, 207):

- Horkheimer habla preferiblemente de <<anhelo de justicia>>, y menos del <<anhelo de lo totalmente Otro>>. Sus expresiones preferidas son, a este respecto, inconfundibles: es el <<anhelos de justicia consumida>>, <<la esperanza de que la injusticia que atraviesa este mundo no sea lo último, que no tenga la última palabra>>, el <<anhelo de que el verdugo no triunfe sobre la víctima inocente>>

Como ya se había mencionado Horkheimer hace una crítica a la religión, entendida como teología, pero con una única finalidad, una esperanza en donde el ser oprimido (víctima), tenga una recompensa a dicho sufrimiento y el opresor (verdugo) sea castigado. Pero aun así no se pueden borrar las secuelas que deja el horror de la opresión.

Horkheimer hace una conceptualización acerca de la ciencia, la fe y la filosofía, y de cómo la fe y la filosofía cambian su sentido a través del tiempo, para Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 99):

- La paz perezosa entre la ciencia y la fe entendidas como disciplinas diferentes, la una orientada a hacer progresar la vida, la economía, la política, y la defensa de la nación, en una palabra, la realidad, y la otra el alma significa la resignación de la teología.

Con respecto a la filosofía Horkheimer afirma: “la filosofía debe expresar el derrumbe de la religión y sus consecuencias para la civilización occidental, por muy inestable que sea” (M, Horkheimer, 2000, p. 98), una descripción según los cambios a los que está sometido el mundo.

En relación con el anhelo para Horkheimer este no cambiara su concepto siempre será: “El anhelo de que no quede todo en la injusticia que atraviesa este mundo, que la injusticia no tenga la última palabra. Este anhelo forma parte del hombre que piensa verdaderamente” (M, Horkheimer, 2000, p. 194), la transformación de la modernidad traerá cambios en la religión, a los cuales la filosofía tendrá que enfrentar y tratar de conservar algo de las ideas que desde ya se desvanecen.

1.2 RELIGIÓN Y CIENCIA.

En relación con la religión, Horkheimer afirma que está desapareciendo; teniendo en cuenta los factores sociales y manipuladores de un mundo administrado, las ideas religiosas y los

conceptos culturales se han ido desfigurando, convirtiéndose en una <<acción de la costumbre, por conformismo o como motivo de fiesta>>. Horkheimer afirma: “Para comprender la religión en la actualidad no basta con pensar en el conjunto de los sorprendentes éxitos en física, astronomía o medicina; es necesario hacer una reflexión más amplia y profunda” (JJ Sánchez, 2000, pp. 116 y 117), es así como la ciencia ha ido cambiando las percepciones de la religión. Por otro lado, Horkheimer sugiere (M, Horkheimer, 2000, p. 118):

- Si, por el contrario, se amplía, el concepto puede convertirse en verdad productiva, en el sentido adecuado del amor al prójimo. Como seres finitos cuya comunidad debería darse en el temor ante el sufrimiento y en la lucha por la mejora y la prolongación de la vida, podría generarse la genuina solidaridad que aunara en sí a la religión y a la gran filosofía. La ciencia no sería un adversario, sino un principal instrumento.

En contra posición, de la sugerencia anterior, la religión, la filosofía y la ciencia han tomado caminos diferentes mientras la religión es la creencia de un Dios todo poderoso, la ciencia, es el producto de una verdad absoluta y la filosofía es una materia espiritual. Como Horkheimer afirma (M, Horkheimer, 2000, p. 99):

- La ciencia es un medio para dominar la naturaleza, para construir autómatas y cohetes, para racionalizar la sociedad; la verdad absoluta, sea lo que fuere lo que ella signifique, es decidida con gusto por la investigación exacta a los curas, como a los artistas de cualquier observancia. En la medida en que la filosofía se contenta con los trabajos lógicos secundarios o, en el caso de la denominada ciencia del espíritu, con la

historia abstracta de filósofos y filosofemas, o bien se ocupa con palabras como ser y entes, esencia y presencia, o con valores eternos, se le reserva aún una disciplina académica.

De manera semejante, la filosofía moderna reside en conciliar conceptos con la religión, en particular conceptos de Dios, con la ciencia. Horkheimer afirma que (M, Horkheimer, 2000, p. 124):

Quien lea sin prejuicios, por interés personal y no filosófico, obras filosóficas desde Descartes encontrara como la genialidad de importantes filósofos, que se revela claramente en el ámbito la teoría del conocimiento filosófico, en el paso hacia las pruebas de la existencia de Dios se transforma en una modesta capacidad combinatoria el propio Descartes, como es sabio, propuso, para hallar la verdad incommovible, dudar de todo hasta dar finalmente con aquello de lo que no fuera posible dudar.

Podemos sustentar, que la filosofía debería ser la búsqueda de la verdad, de un ser perdurable a través de las acciones justas con su prójimo, que sirvan como una herramienta de entendimiento para el ser.

Como ya se ha expresado anteriormente la globalización, el modernismo y la ciencia ha llevado a realizar cambios, en los fenómenos culturales, sociales, religiosos y por ende en el comportamiento de los individuos, esto es debido a los interrogantes que el hombre se ha hecho desde tiempos inmemoriales, para el filósofo Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 119):

- Es necesario expresar <<la duda>>. Las confesiones deben seguir existiendo, pero no como dogma sino como expresión de un anhelo. Pues todos nosotros debemos estar unidos por el anhelo de que lo que sucede en este mundo, la injusticia y el horror, no sea la última palabra, el anhelo existe en un Otro, y de ello nos aseguramos en lo que denominamos religión.

Igualmente, es importante desprender los dogmas, y conservar aquellas costumbres del pasado para no perder el anhelo de justicia al cual hace referencia Horkheimer. El ser “racional” siempre ha estado en una constante incertidumbre, desde los primeros hombres que sintieron curiosidad por las estrellas, el sol, la luna, la lluvia y otros fenómenos naturales. Para Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 111):

- Desde la antigüedad, el concepto de duda ha determinado una de las tendencias filosóficas más decisivas en la historia del pensamiento: el escepticismo. Para él, la seguridad del conocimiento de lo que es y de lo que debe ser, la verdad sin interrogantes, era pereza del pensamiento ingenuidad.

Donde hay duda, no existe la creencia en la verdad de un conocimiento, entre más dudamos más investigamos y conocemos la realidad la anhelada verdad, hasta que no preexista duda. Horkheimer afirma que (M, Horkheimer, 2000, pp. 113 y 115):

- La filosofía moderna debe su existencia, en medio de la inevitabilidad de la religión, en gran medida a la duda, a la creciente consistencia de la contradicción entre

conocimiento mundano-científico y revelación (...) Con la religión, con la idea de verdad, de la que incluso los mártires del ateísmo participaban y que no se agota en el concepto positivista de rectitud, se paga el anhelo del Absoluto, de Otro, que es idéntico a la duda enfática.

Se puede señalar que, Horkheimer no toma una orientación teológico-religiosa, lo hace como su núcleo o centro en sus diferentes tesis, teniendo en cuenta que es importante mantener la duda sobre *lo Otro lo Absoluto*, mantener la duda es reinante pues ella alimenta el anhelo de la justicia.

El siguiente punto, trata de dilucidar el pesimismo, entendido como doctrina del ser, en el cual el mundo es irremisiblemente malo y, por consiguiente, todo en el hombre tiende a la producción y conservación del mal. El pesimismo aparece en el siglo III como Horkheimer afirma (M, Horkheimer, 2000, p. 123):

- Ya la antigüedad conoció el pesimismo. En el siglo III a.n.e. vivió Hegesias, un pensador que vio al mundo de tal modo que llegó a considerar el suicidio como una respuesta adecuada al mismo. (...) Por eso fue, en vida y posteriormente, rechazado o ignorado una y otra vez.

Por otra parte, el filósofo explica el pesimismo de la siguiente manera (M, Horkheimer, 2000, p. 128):

- El pesimismo ha encontrado a través de la evolución de la sociedad nuevos motivos. El destino del individuo, que tanto en la vida como en la muerte constituyó un tema sumamente importante de la filosofía, y por supuesto la teología, pierde su significación no solo en el más allá, sino también en la cruda realidad. Cuanto más racional y correctamente funciona la sociedad, tanto más es cada uno sustituible tanto menos diferenciada es su individualidad.

La filosofía pesimista, se caracteriza por ciertos fenómenos, creencias, experiencias, ideas y/o cosmovisiones asociadas a la pérdida de esperanza, a la falta de alegría, al desánimo, o incluso a la discapacidad. La siguiente cita sustenta como era entendida la filosofía pesimista según Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 123):

- La filosofía pesimista estaba relacionada con la ciencia y la religión, lo mismo que con la metafísica. La opción entre pensamiento religioso y secular cundió y se extendió en Europa, sobre todo a raíz del Renacimiento, Antes y en amplios grupos sociales también después, hasta el siglo XIX, e incluso hasta el siglo XX, el individuo que no creía en Dios o en los dioses, o los negaba, era para muchas personas no tanto un ateo sino sencillamente un limitado o trastornado.

A partir, de los descubrimientos de Galileo la ciencia no hace parte del pesimismo, explicado por Horkheimer en la siguiente cita (M, Horkheimer, 2000, p. 124):

- La ciencia contiene conocimiento e hipótesis, es decir, enunciados que o bien están ya demostrados mediante hechos o deben ser aun aprobados con exactitud; el resto es considerado como no verdad. La investigación científica se esfuerza por encontrar formas que hagan posible, en el lugar y tiempo apropiados y con ayuda de registros fiables, determinar los datos correctos.

Convirtiéndose la ciencia este en un pensamiento positivista, la religión en un pensamiento del espíritu y el individuo, entre la fe y el saber. Se debe agregar que para Horkheimer el pesimismo debe estar ligado a la identidad del sufrimiento, es decir, cuando sientes el sufrimiento del otro como tu yo propio.

2. SINGULARIDAD EN EL MUNDO ADMINISTRADO.

En relación, con el mundo administrado, el filósofo Horkheimer hace un análisis de la función social de la filosofía, en la crítica de lo existente, en donde el ser humano no se pierda en sus ideas, pueda tener un aprendizaje del actuar individual y lo que se logra en la sociedad y en la naturaleza. Es decir “tal vez podamos contribuir a evitar incidentes horrorosos en el proceso” (M, Horkheimer, 2000, p. 182).

Los siguientes son ejemplos del filósofo (M, Horkheimer, 2000, p. 180):

- La energía nuclear – no actué de manera destructiva, deben ser puestas bajo una vigilancia de una administración central verdaderamente racional. Con la píldora, la industria farmacéutica moderna – por poner otro ejemplo – ha convertido a la fuerza

reproductiva humana en una fuerza manipulable; un día necesitaremos también una administración de nacimientos.

A causa de una idea, que pretende optimizar el desarrollo, la economía y satisfacer una necesidad tanto individual como colectiva, son estructuradas por las clases burguesas, estas a su vez pueden generar reglas las cuales coaccionan la libertad.

De igual modo, en el mundo administrado, encontramos la teología del anhelo. Horkheimer lo manifiesta en la siguiente cita retomada de la entrevista realizada en el año de 1970 (M, Horkheimer, 2000, p. 183):

- Es posible que se dé el anhelo también en el mundo administrado. Pues, incluso cuando todas las necesidades materiales estén cubiertas, queda la dura realidad de que el hombre debe morir, y tal vez tendrá especial conciencia de esa cruda realidad justamente porque sus necesidades materiales están satisfechas. Tal vez surja entonces la auténtica solidaridad entre hombres (...) tal vez contribuya ella a aminorar los inconvenientes de la administración total.

Es así que el ser debe tener conciencia de su realidad, no como individuo sino como ser social, si mi contexto social es sano, mi realidad individual también lo estará.

Horkheimer considera que cuando la modernidad científica, sea la respuesta a todos los interrogantes y las necesidades materiales, el ser perderá el sentido y los días serán monótonos,

teniendo en cuenta que la ciencia carece de teología, la cual alimenta al anhelo de justicia hacia el otro. Horkheimer afirma que (M, Horkheimer, 2000, p. 183):

Se eliminará lo teológico. Y con ello se desaparecerá del mundo lo que denominamos <<sentido>>. Habrá una gran actividad, pero una actividad sin sentido y por lo tanto aburrida. Y un día llegara a considerarse también la filosofía cosa de niños. Tal vez en un futuro no muy lejano se dirá de lo que hemos estado hablando con toda seriedad en esta conversación, de la relación entre trascendente y relativo, que es ridículo, la filosofía seria, rigurosa, camina hacia su fin.

En la entrevista realizada a Horkheimer en 1972 ya dilucidaba la pérdida de sentido para el ser. Horkheimer afirma que (M, Horkheimer, 2000, p. 217):

- La vida hoy ya no está transmitida de un sentido, a no ser del sentido que consiste en construir aquella sociedad que, como he dicho, de algún modo es dudosa, a saber, el establecimiento real de la especie humana en la que el individuo singular ya no signifique nada. (...) algo significativo, apariencia, y que el sentido – el sentido de la vida- era transparente {...}. El mundo de la apariencia es en realidad el orden establecido de los hechos de conciencia a la medida de los hombres, no a la lisa de la verdad.

Así pues, Horkheimer nos muestra la pérdida del sentido, de una forma pesimista, en un mundo cada vez más administrado, organizado y caótico, pero aun así se espera el anhelo, que el

ser en un momento de reflexión, cuando sea consciente de su infinitud sienta amor por su prójimo y pueda revertir el horror de las consecuencias de un mundo administrado.

2.1 EL AMOR ELIMINANDO LA SINGULARIDAD: EL MUNDO ADMINISTRADO.

El siguiente punto, tiene el propósito de revelar como Horkheimer interpreta que para el positivismo y la ciencia el amor y el odio son vistos como simples sentimientos sin que exista diferencias, es decir cuando la ciencia elimina la teología como parte de la existencia del ser y el hacer (M, Horkheimer, 2000, p. 204):

- No olvidemos que el amor aprendió una y otra vez, aprendió y renovado a través de la imitación... En tono, los gestos, la mirada, el afecto ilimitado de la madre hacia el niño. Ahora las mujeres son requeridas y absorbidas por la profesión; todo lo que no es puramente funcional se considera estupidez y superstición; lo que se desarrolla no es el individuo sino el colectivo, como en el mundo animal: el hombre se desarrolla como especie.

Teniendo en cuenta, que para Horkheimer el amor y otros sentimientos y actitudes del ser humano son aprendidos o transmitidos por grupos en los cuales cada individuo se desarrolla, pero si estos grupos son transformados o simplemente disueltos, por causa de la superación personal, los estereotipos, avances tecnológicos, es decir por causa del progreso inminente van dejando atrás aquellas transmisiones o enseñanzas tradiciones, que en otras generaciones dejaron

huella. Lo anterior es sustentado por la siguiente cita de Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 204):

- Yo hice referencias sobre todo a la pérdida del amor como fenómeno importante de la vida. El amor se orienta; al Absoluto; él no tiene cabida en la vida organizada de forma puramente funcional, ni en el pensamiento instrumental. El amor termina allí donde toda motivación no racionalista es considerada una necesidad. Desde el punto de vista estrictamente científico, no puede diferenciarse entre los sentimientos.

De ahí que, podamos concluir que para Horkheimer el progreso tecnológico, las necesidades cada vez más materialistas, han sido acompañadas por un proceso de cambios culturales y de deshumanización, los cuales llevan a acabar con sentimientos como el amor.

2.2 ELIMINANDO LA SINGULARIDAD: EL MUNDO ADMINISTRADO.

De las necesidades del ser, de la adquisición de poder, de los estereotipos, de la modernidad, de la globalización, nace el mundo administrado. Según Horkheimer (M, Horkheimer, 2000, p. 180):

- La lógica inmanente de la historia, tal como hoy la entiendo, conduce, efectivamente, al mundo administrado. La administración total del mundo se ha hecho, a mi parecer, inevitable debido al poder creciente de la técnica, al crecimiento de la población, a la imparable reestructuración de cada uno de los pueblos en grupos rápidamente organizados, a la competencia sin escrúpulos entre los bloques de poder.

Horkheimer nos está habilitando aquí, más allá de las críticas que puedan realizarse a algunas de sus afirmaciones fuertemente contextualizadas, es a pensar en alternativas a un razonamiento que se vuelva totalitario. Muchas veces nuestras propias críticas del presente nos llevan a construir teorías que cierran en sí mismas, y que encuentran en ciertos elementos de la vida social –entre ellos los religiosos, pero también lógicas otras a nuestra racionalidad universitaria- elementos extraños que, al no poder ser ubicados en un lugar de nuestros esquemas, son invisibilizados, negados e incluso eliminados.

- El desafío para el futuro es elaborar una teoría crítica que deje siempre abierta la pregunta por lo Otro, no para caer en explicaciones metafísicas, sino justamente para dejar que lo que está por fuera de nuestras categorizaciones –tantas veces prefijadas y cristalizadas por muy críticos que nos consideremos- nos invite a reverlas y reelaborarlas. Solo en un pensamiento que se mantenga abierto al anhelo de lo Otro, que pueda compadecerse del sufrimiento del otro y buscar por la justicia, nos permitirá esperar lo malo, y no obstante intentar lo bueno. (M García, 2016, pp. 11, 12 y 13).

TERCER CAPITULO

EL PRINCIPIO PARA LA DECISIÓN ÓPTIMA

La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.

Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite, como una concesión graciable, el ejercicio de religiones distintas a la impuesta oficialmente, en situaciones de confesionalidad del Estado propias del Antiguo Régimen. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno.

La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. Así, como lo hace

la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica:

- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

De la misma forma el derecho a la libertad de culto es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 19. Y es aquel derecho que se resume en que cada persona puede elegir libre y voluntariamente su religión y puede profesarla o expresarla libremente. Puede decidir también no pertenecer a ninguna religión.

Este derecho como la mayoría de los derechos fundamentales en Colombia, es vulnerado por las personas, la gente no respeta las creencias religiosas y las inclinaciones culturales de la gente, principalmente por choques con sus mismas creencias o religión.

Partiendo de la base, anterior y del análisis que se ha realizado, dentro de la presente tesis de la jurisprudencia colombiana y el libro “Anhelos de Justicia” de Max Horkheimer, investigaremos como se encontraría la solución óptima, según lo expresado por Horkheimer, y si en los tribunales internacionales, dicha solución se cumple.

1. LA DECISIÓN ÓPTIMA

Del libro “*Anhelo de Justicia*” de Horkheimer; acerca de la religión surge la tesis del principio general según el cual el orden constitucional o político debe garantizar la pluralidad de creencias religiosas, esto es, que cada quien pueda practicar su religión singular o propia. En Horkheimer, se debe dejar claro desde ahora, no se pretende *politizar o desacralizar el culto religioso*, como denuncia Baisotti (2017).

1.1 BASE FUNDAMENTAL.

La libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano y con base en ella, pero al lado de la dignidad humana, se ha construido la esencia de los derechos de la persona. Las libertades públicas, ámbito de actuación del individuo oponible al actuar de las autoridades, han sido una conquista histórica que ha ayudado a la reivindicación del ser humano, razón por la cual resulta de especial importancia adentrarnos en el pensamiento filosófico de la tesis de Horkheimer acerca de la Religión, y de esta forma poder demostrar cómo surge de dicha tesis la forma correcta o idónea de aplicar al orden Constitucional o Político, la pluralidad de creencias religiosas, para poder garantizar un Estado social democrático de derecho, que en Colombia lo cita la Constitución Política: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.” (Const. 1991, art. 19), o en otras palabras que cada persona o individuo, puede practicar su religión singular o propia.

En producción filosófica, Horkheimer destaca la presencia de la religión como destinada a la continuidad, tesis novedosa en tanto numerosas opiniones tanto de la época como de momentos posteriores anunciaban con especial publicidad el final del hecho religioso y su sustitución por sucedáneos seculares. La continuidad de la religión se concibe no en tanto compendio de dogmas, sino como expresión de un anhelo, noción fundamental en esta fase final. Existe la referencia a la religión como instancia que proporciona respuestas ante las necesidades ajenas a la lógica y la pura racionalidad, que motiva y sostiene formas de comportamiento, que inspira al ser humano elevándolo de su sencilla cotidianeidad.

Horkheimer establece una unidad intersubjetiva en la conciencia, a diferencia del planteamiento. Estamos unidos porque todos somos finitos y nos enfrentamos al sufrimiento, a la duda y a la muerte. Se cuestiona el precio del progreso, que es traducido no solo en ventajas tecnológicas, sino en víctimas, muertes e injusticias que han servido de funesto pedestal a los “vencedores” de la historia.

En definitiva, Horkheimer trata de resaltar la expresión humana del anhelo de justicia. Es importante matizar que el autor fundamenta aquí la moral en la teología. Dios no es representable, pero se “presenta” desde la forma del anhelo. Lo único tangible con lo que contamos es con el sentimiento o deseo de la existencia de Dios. La teología comprende uno de los fundamentos de la moral, siendo acaso el más importante o el que recibe mayor relevancia en los textos de Horkheimer, acompañado del deseo de promocionar y aumentar la belleza de la existencia mediante la ejecución de los buenos actos.

1.2 LA SOCIEDAD DENTRO DEL PENSAMIENTO DE RELIGIÓN QUE EXPONE HORKHEIMER.

Horkheimer parte del anhelo de justicia cumplida, característica originaria del hombre. En ese sentido, para Horkheimer no carece de importancia que exista o no un Dios, que yo crea o no crea en él. Para él lo importante, son las acciones y actitudes humanas, en el fondo, ya que estas, están determinadas teológicamente.

Es decir, para Horkheimer todo lo que tiene relación con la moral se reduce en último término a teología: Desde la perspectiva inicial del positivismo es imposible deducir una política moral. Bajo un punto de vista puramente científico, el odio no es peor que el amor... No hay ningún razonamiento lógico irrefutable por el que yo no deba odiar, cuando de ello no se deriva para mí perjuicio alguno en la vida social. Pues ¿cómo se puede exactamente demostrar que yo no debo odiar, si me gusta? No encontramos entonces ninguna instancia trascendente al hombre que permita distinguir entre altruismo y afán de lucro, entre bondad y crueldad, entre codicia y entrega de sí mismo. También la lógica enmudece aquí: no reconoce preeminencia alguna a la intención moral.

De modo que la religión, o cuando menos el sentimiento íntimo de que Dios existe, tiene una importancia decisiva para la realización de una sociedad más razonable y más justa, para una ordenación plausible de lo existente (que incluya al menos la eliminación de crueldades sin sentido), para la contienda que a escala mundial se dirime entre los grandes núcleos de poder económico.

Para Horkheimer la religión, en la que se concentran los deseos, anhelos y quejas de innumerables hombres ante la inmensidad del sufrimiento y la injusticia, hace consciente al hombre de que es un ser finito, de que tiene que padecer y morir, pero también de que por encima del dolor y la muerte está la añoranza de que esta existencia terrena no sea lo absoluto, lo definitivo. Por otra parte, pues, está la añoranza por el otro. Y esto, para una teología, significa que el mundo es apariencia, que el mundo no es la verdad absoluta, lo definitivo.

La teología es la esperanza de que esta injusticia que caracteriza al mundo no prevalezca para siempre, de que la injusticia no sea la última palabra, de que el asesino no triunfe sobre la víctima inocente.

1.3 EL PRINCIPIO GENERAL PARA UNA DECISIÓN JUSTA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O POLÍTICO.

Dentro del texto *Anhelos de Justicia* de Max Horkheimer, se realiza una interpretación bastante interesante al referirse de una forma distinta a la política como tal y darle una connotación de Sociedad, y de allí desglosar como sería la decisión optima de la Religión dentro del Orden Constitucional o Político, lo expresa de esta forma: “En la Torá el Eterno se dirige al pueblo y al individuo singular con las mismas palabras. El precepto <<**Ama a tú prójimo, pues él es como tú**>> se dirige tanto al colectivo como al individuo. (M, Horkheimer, 2000, p. 240)

No hay para Horkheimer una moral como voluntad escrita por Dios en el corazón humano, o una razón práctica, ya que ante el imperativo categórico la razón puede comportarse de manera neutral, y no tiene más motivos para aceptarlo que para rechazarlo. De esta forma “la

fundamentación del amor al prójimo”, se basa en encontrar respeto hacia el otro sin importar cuál sea su religión. Solo en un pensamiento que se mantenga abierto al anhelo de lo Otro, que pueda compadecerse de sufrimiento del otro y buscar la justicia nos permitirá buscar lo bueno.

En base en lo anterior podríamos concluir entonces que la función de la religión dentro del Orden Constitucional o Político apunta hacia la toma de decisiones acertadas en base a la presencia del anhelo de lo justo. Donde mi prójimo es igual a mí, sin importar su creencia religiosa, así pues, el respeto y la tolerancia, vendrían a ser bases fundamentales para convivir de manera adecuada dentro de una sociedad con pluralidad de religiones, sin embargo, en el momento de encontrar problemas de conflictos dentro de la sociedad por sus creencias religiosas, y lo cual se deba recurrir a instancias de poder como lo son los Tribunales y demás; la solución óptima sería encontrar el equilibrio, para que ninguna persona salga perjudicada, ni moral, ni económicamente; ya sea desde el ámbito social que se enmarque el conflicto, ocasionado a raíz de su convicción o creencia religiosa, por ejemplo: colegio, trabajo, comunidad, etc.

2. LA DECISIÓN ÓPTIMA EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA.

Así, pues, partiendo de la base anterior como la solución óptima según Horkheimer, para encontrar un resultado armónico, trataremos de encontrarla dentro de las sentencias, proferidas por la Corte Constitucional, en los diferentes casos, donde se encuentra vulnerado el derecho a las Libertades Religiosas.

2.1 RELIGIÓN Y EDUCACIÓN.

“En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.” Es importante además señalar que la educación está contemplada como un derecho fundamental dentro de la Constitución en su Artículo 67, donde textualmente estipula “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”

Así, pues podemos encontrar, como dicho artículo es vulnerado en Colombia, teniendo en cuenta la línea de Jurisprudencia analizada en la presente tesis, al encontrar que dentro de las

Sentencias hablan de Negación de cupo por convicciones Religiosas, Asignación de Materias que van en contra de las creencias Religiosas y otros.

De esta forma Vulnera lo estipulado en la Ley 115 de 1994, principalmente en su Art. 5, que nos establece como pilares fundamentales, El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, y a su vez el principio a la decisión Optima planteada por Horkheimer, ya que no se respetan la pluralidad de creencias religiosas, teniendo en cuenta que en los diferentes casos encontrados dentro de la Jurisprudencia Colombia, las personas no pueden practicar lo que es propio de él y en muchos de sus fallos, niegan o vulneran, algún derecho fundamental con respecto a la religión, educación o los principios fundantes del establecimiento Educativo.

2.2 RELIGIÓN, SALUD Y TRABAJO.

En Colombia, en el quehacer profesional de los trabajadores de la salud, debe de aceptarse el hecho de la ausencia o presencia de las creencias religiosas en las personas sobre las cuales se ejercen las funciones de promoción y prevención de salud, pues mientras más conocimientos se tenga sobre éstas y otras cogniciones que la acompañan, como las referidas a la salud, mayor colaboración y resultados se obtendrá en cualquier nivel de atención en el que se trabaje, sin embargo podemos denotar como debido a la creencias religiosas de las personas, se encuentra un choque de derechos fundamentales, como lo son el de la Vida contemplado en la

Constitución Política en su artículo 11 que establece “La vida es el derecho más importante para los seres humanos. La vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes.

Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el derecho a la vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se los concede está muerto. Integra la categoría de derechos civiles, y de primera generación, y está reconocido en numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanas y Degradantes.” ; el del trabajo contemplado en el artículo 25 de la Constitución Política “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas “y el de las creencias Religiosas o derecho a la libertad de culto consagrado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 19, que es la base fundamental de la presente tesis.

Bajo los mandatos de la Constitución política de Colombia 1991, la Salud, y el trabajo son derechos fundamentales, que entran en conflicto dentro de la línea Jurisprudencial Colombiana demarcada dentro de la presente tesis, y la creencias Religiosas, de algunas personas

bajo las condiciones dignas y justas en que se circunscribe el reconocimiento de dichos derechos en casos específicos, como tratamientos de salud, (Cirugías, tratamiento terapéutico suministrado al paciente), y en el campo laboral, cuando por sus convicciones religiosas, el empleador despidió al empleado; así pues podemos observar como el jurista Colombiano, en este choque de derechos basándonos en la solución Óptima de Horkheimer, toma la decisión adecuada, al promover y respetar, cada uno de los derechos fundamentales; además que en se le repara el daño económico causado, en el caso que hubo lugar a hacerlo, como lo podemos ver en la Sentencia T-327/09.

2.3 RELIGIÓN Y RECONOCIMIENTO O PARTICIPACIÓN.

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia reconoce la participación ciudadana como un valor constitucional, un principio fundamental y como uno de los fines esenciales del Estado, transformando el sistema político imperante a la fecha y avanzando significativamente en la construcción de un modelo de Estado donde la ciudadanía, las regiones y las minorías juegan un papel fundamental en la definición del destino colectivo.

El reconocimiento o participación dentro la sociedad, hace que comparta varias visiones de mundo y así establezca relaciones basadas en la tolerancia y el respeto a los otros. Las sociedades que aceptan su diversidad de culturas suelen también ser sociedades más pacíficas y con más elementos y herramientas para resolver sus conflictos.

De esta forma podemos encontrar que dentro del análisis que se realizó en la presente tesis, de la jurisprudencia colombiana, se encuentra un choque con respecto al Reconocimiento o participación del ciudadano, y sus creencia religiosas, dándonos a conocer, diferentes campos, como lo son: La citación de una norma en particular con respecto a una religión; al indígena que se le vulnera el derecho de predicar su religión dentro, de su comunidad; el reo que no encuentra un espacio, para practicar su religión en la cárcel; entre otros. De esta forma la solución óptima planteada por Horkheimer, se está respetando, para los fallos de las sentencias enunciadas en la presente tesis respeta los diferentes derechos fundamentales, vulnerados al proveer y respetar cada uno de ellos, con respecto de sus creencias religiosas.

3. EL PRINCIPIO EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

Ahora, pasaremos a analizar si la solución óptima según Horkheimer, se logra encontrar en lo proferido por los Tribunales Internacionales, donde se encuentra vulnerado de igual forma el derecho a las Libertades Religiosas.

3.1 KOKKINAKIS CONTRA GRECIA.

El demandante Sr. Kokkinakis de nacionalidad griega, en una familia de confesión ortodoxa. Convertido a los Testigos de Jehová en 1936, fue condenado más de sesenta veces entre los años de 1938 a 1986 por proselitismo y ha sufrido en otros tiempos diversos internamientos y encarcelamientos, ordenados por autoridades administrativas y por tribunales sancionadores, motivados por sus actividades en materia religiosa y por hechos de proselitismo.

El Tribunal Europeo falla por unanimidad que el Estado demandado debe entregar a la parte demandante, en el plazo de tres meses, 400.000 (cuatro cientos mil) dracmas en concepto de daño moral y 2.789.500 (dos millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos) dracmas por las costas y gastos.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos denotar que se está adoptando la solución óptima, ya que se le está respetando, a los demandantes sus creencias ortodoxas y se le está reparando el daño causado moralmente, por las condenas anteriores a sus actividades religiosas, por parte del Estado demandado (Grecia); y la vez se sigue respetando las diferentes creencias religiosas que tienen los otros miembros de dicho Estado. Tal y como lo aduce, el Tribunal destacando que la responsabilidad del actor, basándose en unos motivos que se limitaban a reproducir los términos del artículo 4 de la ley nº 1363/1938. Concentra su argumentación sobre el problema más amplio de la compatibilidad de este texto con el derecho consagrado por el artículo 9 del Convenio que, incorporado después de 1953 al Derecho griego, tendría, en virtud de la Constitución, un valor superior a toda ley contraria del artículo 4, sin precisar suficientemente en qué había intentado el detenido convencer a su prójimo recurriendo a medios abusivos. Ninguno de los hechos relatados por la contra parte permitía comprobar este extremo. Por consiguiente, estima que no queda demostrado que la condena del demandante estuviera justificada, en las circunstancias del caso, por una necesidad social imperiosa, y que la medida inculpativa no fue proporcionada al fin legítimo perseguido, ni, por tanto, necesaria “en una sociedad democrática” para la “protección de los derechos y libertades de los demás”.

3.2 LEYLA SAHIN CONTRA TURQUÍA.

La demandante Leyla Sahin nació en 1973 en Viena desde 1999, año en el que abandonó Estambul para seguir sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de esa ciudad. Pertenece a una familia tradicional que practica la religión musulmana y lleva el velo islámico para respetar un precepto religioso. Afirma haber llevado el velo islámico durante los cuatro años de estudios de medicina en la Universidad de Bursa.

El 23 de febrero de 1998, el rector de la Universidad de Estambul difundió una circular reglamentando la entrada de los estudiantes en el campus universitario. Conforme a esta circular, el 12 de marzo de 1998, los vigilantes negaron a la demandante el acceso a las pruebas escritas del curso de oncología porque llevaba el velo islámico. Además, el 20 de marzo de 1998, la señora Sahin se dirigió a la secretaría de la cátedra de traumatología ortopédica para matricularse, lo que le fue denegado por llevar el velo islámico. Así mismo, los días 16 de abril y 10 de junio de 1998, siempre por el mismo motivo, no fue admitida en una clase de neurología y en el examen escrito del curso de salud popular. Debido a las circunstancias anteriores la demandante el 16 de septiembre de 1999, se matriculó en la Universidad de Viena, donde prosigue sus estudios superiores.

El Tribunal concluye que la reglamentación de la Universidad de Estambul que somete el uso del velo islámico a restricciones, y las medidas correspondientes a ellas, están justificadas en su principio y son proporcionadas a los fines perseguidos, y pueden por lo tanto ser consideradas, «necesarias en una sociedad democrática».

Así las cosas, podemos ver que se está adoptando la solución óptima ya que el ciudadano según su religión puede escoger otro establecimiento educativo para seguir con sus estudios superiores; y simultáneamente le permite a la Institución Universitaria, seguir ofreciendo sus servicios Educativos. Además, que se debe denotar que la aplicación hecha por la Universidad de Estambul del texto en cuestión, queda fuera de toda duda que el uso del velo islámico estaba regulado mucho antes de la que señora Sahin se matriculara en ella. Como atestiguan la resolución de 1 de junio de 1994 de la Universidad de Estambul y la nota de información de 1994 del Rector de esta universidad, los estudiantes, en particular los que siguen estudios sanitarios como la demandante, estaban obligados a obedecer las normas establecidas en materia de vestido. Estas normas prohibían claramente el uso de una ropa religiosa, incluido el velo islámico, en las clases prácticas de estudios de ciencias de la salud y de ciencias aplicadas.

3.3 JOSÉ ANTONIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRA EL GOBIERNO ESPAÑOL.

El Sr. José Antonio Fernández Martínez, nació en el año 1937, Fue ordenado como sacerdote en 1961. En 1984, solicitó al Vaticano la dispensa de los votos de celibato. No recibió respuesta en aquel momento. Al año siguiente, contrajo matrimonio civil. Ha, tenido 5 hijos con la mujer que todavía es su esposa. A partir de octubre de 1991, el demandante impartió la enseñanza de religión y moral católica, en un Instituto público, en base a un contrato de trabajo anual renovable. “el Papa aceptó la solicitud de dispensa de celibato que el demandante había formulado 13 años antes, precisando que el interesado estaba exento de la obligación del celibato y perdía la "condición" clerical.

Los derechos asociados a esta "condición", así como los honores y funciones eclesiásticos se le retiraban. Dejaba de estar sujeto a las obligaciones consustanciales a la "condición" clerical. El rescripto indicaba, por otra parte, que el demandante ya no podría impartir la enseñanza de la religión católica en un establecimiento público, a menos que el obispo del lugar decidiera otra cosa, destinándole a un establecimiento de nivel inferior, en función de sus prudentes criterios y siempre que no se produjera escándalo. En cuanto a las consecuencias para el demandante de la no renovación de su contrato de trabajo, no hay ninguna duda de que esta decisión ha constituido una sanción que ha tenido fuertes repercusiones en su vida privada y familiar.

En su nota, el Obispo ha, sin embargo, tenido en cuenta estas dificultades e indicado que el interesado podría percibir las prestaciones por desempleo. Se debe constatar a este respecto que, tras la no renovación de su contrato, el demandante ha percibido, efectivamente, dichas prestaciones.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que las jurisdicciones nacionales han tenido en cuenta todos los elementos pertinentes y, aunque hayan hecho hincapié en el derecho del demandante a la libertad de expresión, han procedido a efectuar una ponderación circunstanciada y detenida de los intereses en juego, dentro de los límites que le imponía el respeto debido a la autonomía del Iglesia Católica.

Las conclusiones a las que han llegado no parecen irrazonables al TEDH, especialmente a la luz del hecho de que el interesado, por haber sido sacerdote y director de seminario, era o

debía ser consciente, al aceptar el cargo de profesor de religión católica, de las posibles consecuencias de la obligación de lealtad acrecentada a la que se había comprometido con la Iglesia Católica, a los efectos, particularmente, de preservar la credibilidad de su enseñanza.

En cuanto a la autonomía de la Iglesia, no parece, a la luz del control ejercido por las jurisdicciones nacionales, que haya sido invocada de forma abusiva en el presente caso, es decir que la decisión del obispado de no proponer la renovación del contrato del demandante haya sido insuficientemente motivada, arbitraria o que haya sido tomada con un fin ajeno al ejercicio de la autonomía de la Iglesia católica.

Podemos ver entonces como el TEDH, adopta la solución óptima, ya que respeta las leyes preestablecidas en el ordenamiento religioso del catolicismo como sacerdote, las cuales el demandante conocía y debido a su deseo de tener familia renuncia a sus votos de celibato; y de igual forma le repara la pérdida de trabajo por la terminación de contrato y le permite seguir como miembro de la iglesia católica.

Además, en lo que respecta a la naturaleza del contrato, el Tribunal estimaba que, en la medida que su renovación estaba sujeta a la aprobación anual del Obispo para el curso académico siguiente, se trataba de un contrato temporal, que, en el presente caso, había llegado simplemente a su término. Por consiguiente, no era posible considerar que el demandante había sido objeto de un despido. La no renovación del contrato estaba justificada en la medida en que el interesado había actuado de manera contraria al Rescripto de dispensa al aceptar de hacer pública su situación familiar.

3.4 DIFERENTES CASOS CONTRA REINO UNIDO.

En este sentido los Tribunales Internacionales, del Reino Unido, dentro de una misma sentencia, exponen varios casos de carácter religiosa, cuyos demandantes consideran que el estado o le está vulnerando dicho, derecho.

3.4.1 EWAIDA CONTRA REINO UNIDO.

La primera demandante, quien vivió los primeros dieciocho años de su vida en Egipto, es practicante del cristianismo. Desde 1999 trabaja como miembro de la plantilla de British Airways Plc, una empresa privada. British Airways requiere a todos sus empleados en contacto con el público que lleven uniforme. Dentro del lineamiento del uso del uniforme de la empresa se establece que “Cualquier accesorio o prenda de vestir que el empleado, por motivos religiosos, esté obligado a llevar, debe en todo momento estar cubierto por el uniforme”. El 20 de mayo de 2006 decidió empezar a llevar la cruz a la vista, como un signo de su compromiso con su fe. Cuando llegó al trabajo ese día, su jefe le pidió que se quitara la cruz y la cadena o que la ocultara bajo su corbata.

La señora Eweida inicialmente se opuso, pero finalmente accedió a cumplir con la orden después de discutir el asunto con un superior. El 20 de septiembre de 2006, se negó a quitarse o esconder la cruz y fue enviada a casa sin sueldo hasta el momento en que decidiera cumplir con su obligación contractual respecto al uso del uniforme.

El 23 de octubre de 2006, se le ofreció un trabajo administrativo sin contacto con el público, que no requería uniforme, pero ella rechazó el ofrecimiento. A mediados de octubre de 2006 aparecieron publicados una serie de artículos de prensa sobre el caso de la señora Eweida críticos con British Airways.

Tras celebrar consultas con los miembros del personal y los representantes sindicales, se decidió el 19 de enero de 2007 aprobar una nueva política. A partir del 1 de febrero de 2007, la exhibición de símbolos religiosos y de caridad sería permitida cuando fuera autorizada. Algunos símbolos, como la cruz y la estrella de David, recibieron autorización inmediata.

La señora Eweida regresó a trabajar el 3 de febrero de 2007, con permiso para usar la cruz según la nueva política. Sin embargo, British Airways se negó a indemnizarle por los ingresos perdidos durante el tiempo que decidió no acudir al trabajo.

EL tribunal, por tanto, concluye que, en estas circunstancias donde no hay ninguna prueba de invasión real de los intereses de terceros, las autoridades nacionales no protegieron de manera suficiente el derecho de la primera demandante a manifestar su religión, vulnerando la obligación positiva de conformidad, por lo anterior ordena el conceder la suma de 30.000 euros en relación a los procedimientos ante el Tribunal, incluyendo cualquier impuesto que corresponda a la señora Eweida, por los días no laborados mientras la empresa, asumió en las políticas del nuevo Reglamento.

El Tribunal adopto la solución óptima ya que repara el daño ocasionado a la señora respecto de sus creencias religiosas, con relación a los días dejados de percibir laboralmente, y a su vez, avala la decisión tomada por la empresa con respecto a su nuevo reglamento del uso de uniforme, protegiendo así, las creencias religiosas de cada persona, tanto interna como externa de la empresa.

3.4.2 CHAPLIN CONTRA REINO UNIDO.

La segunda demandante también es cristiana practicante. Había llevado una cruz alrededor del cuello desde su confirmación en 1971, como una expresión de sus creencias. Ella piensa que quitarse la cruz constituye una violación de su fe. La señora Chaplin se graduó como enfermera en 1981 y fue contratada por la Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust, un hospital estatal, desde abril de 1989 a julio de 2010 con un historial laboral excepcional.

El hospital tenía una política de uniformes basada en la guía del departamento de salud. En junio de 2009, el superior de la señora Chaplin le pidió que se quitara su «collar». Insistió en que la cruz era un símbolo religioso y solicitó autorización para usarlo. Ésta le fue denegada debido a que la cadena y la cruz podían provocar lesiones si un paciente anciano tiraba de ella.

La señora Chaplin propuso entonces llevar la cruz en una cadena asegurada con sujeciones magnéticas, que inmediatamente se soltaría si era agarrado por un paciente. Sin embargo, la autoridad sanitaria lo rechazó debido a que la cruz aun así supondría un riesgo para

la salud y la seguridad si podía oscilar libremente; por ejemplo, podría entrar en contacto con heridas abiertas.

Por último, se le sugirió que podía asegurar su cruz y la cadena al cordón que sostenía su tarjeta de identidad. Todo el personal estaba obligado a llevar un distintivo de identidad agarrado a un bolsillo o a un cordón. Sin embargo, también era necesario que se quitaran la acreditación y el cordón cuando realizaban tareas clínicas delicadas y, por esta razón, la demandante también rechazó esta sugerencia. En noviembre de 2009, La señora Chaplin fue trasladada a un puesto de trabajo provisional de no enfermería que desapareció en julio de 2010.

El Tribunal considera que, como en el caso de la señora Eweida, la importancia para la segunda demandante de permitirle manifestar su religión portando su cruz a la vista debe pesar en la balanza. Sin embargo, la razón para solicitarle que se la quitara, a saber, la protección de la salud y seguridad en una sala de hospital, era, en esencia, de una magnitud mayor que la que se aplicó respecto de la señora Eweida, por lo tanto, consideran acertada la decisión del traslado. Con respecto del Caso

En el caso de la señora Chaplin, se respeta de igual forma las creencias religiosas del empleado, al darle traslado a un área donde no corra riesgo otras personas, al contacto con el uso de artículos religiosos, basados en las creencias del demandante, teniendo en cuenta, además, el reglamento interno del establecimiento Hospitalario y el uso de uniforme adecuado por protección a la singularidad de los ciudadanos que atiende.

3.4.3 LADELE CONTRA REINO UNIDO.

La tercera demandante es cristiana. Mantiene la opinión de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, y cree sinceramente que la unión entre parejas del mismo sexo es contraria a la Ley de Dios.

La señora Ladele trabajaba en el municipio londinense de Islington. En 2002 la señora Ladele se convirtió en funcionaria del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios. La Ley dispone sobre el registro legal de las uniones civiles entre dos personas del mismo sexo y les atribuye los mismos derechos y obligaciones a los de un matrimonio.

En diciembre de 2005, Islington decidió designar a todos los funcionarios del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios existentes como funcionarios del registro de parejas civiles. No estaba obligada a hacerlo; la legislación lo requiere simplemente para asegurar que exista un número suficiente de funcionarios registradores de parejas civiles en la zona para llevar a cabo esa función.

En un principio, se permitió que la señora Ladele hiciera arreglos informales con sus compañeros intercambiando trabajos para no tener que celebrar ceremonias de parejas civiles homosexuales. Sin embargo, en marzo de 2006, dos compañeros denunciaron que su negativa a realizar tales funciones era discriminatoria. En una carta fechada el 1 de abril de 2006 se informó a la señora Ladele que, en opinión de la autoridad local, negarse a officiar uniones civiles podría suponer el incumplimiento del código de conducta y la política de igualdad. Se le solicitó una respuesta por escrito para confirmar que en adelante officiaría ceremonias de uniones civiles. La

tercera demandante se negó a aceptar y solicitó que la autoridad local lo arreglara para que se adaptara a sus creencias.

La negativa de la señora Ladele a officiar uniones civiles homosexuales fue causando dificultades y cargando de tarea a los demás y hubo quejas de compañeros homosexuales que sentían victimizados. En mayo de 2007, la autoridad municipal inició una investigación preliminar, que concluyó en julio de 2007 con una recomendación de presentar una queja disciplinaria contra la señora Ladele que, al negarse a officiar uniones civiles debido a la orientación sexual de las partes, había incumplido el código de conducta de la autoridad local y la política de igualdad y diversidad.

El 16 de agosto de 2007 se celebró una audiencia disciplinaria. Tras la audiencia, la señora Ladele fue invitada a realizar otro trabajo que requería realizar sencillas contratos del registro de uniones civiles y trabajo administrativo en relación con las uniones civiles, pero sin ninguna exigencia de officiar ceremonias.

El Tribunal no considera que las autoridades nacionales, como son el superior de la autoridad local que llevó el proceso disciplinario y los tribunales nacionales que rechazaron la reclamación de discriminación de la demandante, superaran el margen de apreciación del que disponían. Por lo tanto, no puede decirse que haya habido una violación a derechos. Respecto del caso.

El Tribunal, está tomando la decisión optima, ya que de la apelación concluyó que el artículo 9 del Convenio y la jurisprudencia del Tribunal apoyaban la opinión de que el deseo de la señora Ladele de que se respetaran sus creencias religiosas no permitía «...anular la preocupación de Islington en garantizar que todos sus funcionarios registradores manifiesten el mismo respeto por la comunidad homosexual como por la comunidad heterosexual».

Además, señaló que desde el momento en que entró en vigor el Reglamento de 2007, una vez la señora Ladele fue designada funcionaria registradora de uniones civiles, Islington no tenía simplemente derecho, sino que estaba obligado a exigirle a oficiar uniones civiles. De igual, forma se le está respetando sus creencias religiosas, ya que se le da la oportunidad a la señora Ladele, que busque un trabajo en otra entidad, donde no sienta vulnerado el derecho a su creencia y pueda ejercer su profesión, sin generar ninguna sanción, solo el llamado de atención por parte de la registraduría, teniendo en cuenta las inconformidades, de sus compañeros de trabajo.

3.4.4 MCFARLANE CONTRA REINO UNIDO.

El cuarto demandante es cristiano practicante y era de los miembros más antiguos de una gran iglesia multicultural en Bristol. Declara una profunda y verdadera creencia en que la Biblia afirma que la actividad homosexual es un pecado y que no debe hacer nada que apoye directamente dicha actividad. *Relate Avon Limited* («*Relate*») forma parte de la Federación

Relate, una organización privada nacional que proporciona servicios de asesoramiento sexual confidencial consejo sobre relaciones.

Relate y sus consejeros son miembros de la Asociación Británica de Terapia sexual y relacional (ABTSR). Dicha asociación tiene un código ético y unos principios de buenas prácticas que Relate y sus consejeros asumen. El señor McFarlane trabajó para Relate como asesor desde mayo de 2003 hasta marzo de 2008. Inicialmente tuvo algunos problemas para prestar servicios de asesoramiento a parejas del mismo sexo, pero tras discutir con su supervisor, aceptó que asesorar a parejas homosexuales no implicaba la aceptación de ese tipo de relación y, por tanto, se preparó para continuar. Posteriormente asesoró a dos parejas de lesbianas sin ningún problema, aunque en ningún caso se planteaban problemas sexuales.

En el otoño de ese año en Relate de que él no estaba dispuesto a trabajar en cuestiones sexuales con parejas homosexuales. Para responder a estas inquietudes, el gerente de Relate, señor B, se reunió con el señor McFarlane en octubre de 2007. El demandante confirmó que tenía dificultades para conciliar el trabajo sobre prácticas sexuales con las parejas del mismo sexo y su deber de seguir las enseñanzas de la Biblia. El señor B expresó su preocupación sobre la imposibilidad de filtrar clientes para evitar que el señor Mcfarlane tuviera que proporcionar terapia psico-sexual a parejas de lesbianas, gays o bisexuales.

El 5 de diciembre de 2007, el señor B recibió una carta de otros terapeutas expresando su preocupación respecto a que un asesor anónimo no estaba dispuesto, por motivos religiosos, a trabajar con clientes gays, lesbianas y bisexuales. El 12 de diciembre de 2007, el señor B escribió

al señor McFarlane afirmando que había entendido que se negaba a trabajar con parejas del mismo sexo en algunas cuestiones, y que temía que era discriminatorio y contrario a la política de igualdad de oportunidades de Relate. Solicitó una confirmación por escrito el 19 de diciembre de 2007 de que el señor McFarlane seguiría aconsejando a parejas del mismo sexo en terapia psico-sexual y asesoramiento sobre la relación, cuya negativa acarrearía una sanción disciplinaria.

El 2 de enero de 2008 el señor McFarlane respondió confirmando que no tenía ninguna reserva en asesorar a parejas del mismo sexo. En una reunión de investigación el 7 de enero de 2008 el demandante reconoció que existía un conflicto entre sus creencias religiosas y la terapia psico-sexual con parejas del mismo sexo, pero afirmó que, si se le pedía que hiciera el trabajo, lo haría y si surgía cualquier problema hablaría con su supervisor. El señor B entendió que el señor McFarlane se comprometía a cumplir con las políticas de Relate, y, por lo tanto, detuvo la investigación disciplinaria. Tras una conversación telefónica con el cuarto demandante, su supervisor contactó con el señor B para expresarle su gran preocupación.

Consideraba que el señor McFarlane o estaba confuso sobre la cuestión de la terapia psico-social con personas del mismo sexo, o estaba siendo deshonesto. Cuando se le plantearon estas cuestiones, el señor McFarlane afirmó que no habían cambiado sus puntos de vista desde la primera discusión y que se trataría cualquier problema cuando surgiera. El 18 de marzo de 2008, el señor B despidió a el señor McFarlane por falta grave, al concluir que el demandante había afirmado que cumpliría con la política de Relate y proporcionaría asesoramiento sexual a parejas

del mismo sexo sin tener ninguna intención de hacerlo. Por tanto, no se podía confiar en que cumpliera su trabajo de conformidad con la política de igualdad de oportunidades.

El Tribunal, expresa que el factor más importante a tener en cuenta es que la medida del empleador pretendía garantizar la aplicación de su política de brindar un servicio sin discriminación. Las autoridades del Estado se benefician, por tanto, de un amplio margen de apreciación donde situar la balanza entre el derecho del señor Mcfarlane a manifestar sus creencias religiosas y el interés de su empleador en asegurar los derechos de los terceros.

En estas circunstancias, el Tribunal no considera que este margen de apreciación se haya excedido en el presente caso. En conclusión, el Tribunal no considera que el rechazo por parte de los tribunales internos de las reclamaciones del señor Mcfarlane suponga una violación de derechos.

Igualmente se respeta las creencias religiosas, él demandante al ser cristiano y tener como base fundamental de su fe, que no puede hacer nada que apoye el tema del homosexualismo, y la empresa donde trabaja que está encaminada a tocar temas de tratamiento social sobre ayudas a los homosexuales y demás. Se le despide al demandante con justa causa, al no querer, cumplir con los lineamientos de la empresa y sus reglamentos establecidos, respetando así sus creencias religiosas, y de igual forma se respeta las creencias religiosas de los usuarios de la empresa de carácter homosexual, y el objetivo social de la empresa, permitiéndole al señor McFarlane que busque un trabajo en otra entidad, donde no sienta vulnerado el derecho a su creencia y pueda ejercer su profesión.

3.5 INSTITUTO NACIONAL DE LA FAMILIA Y LA VIDA CONTRA CALIFORNIA.

Responsabilidad, Integral Cuidado y (FACT Act) Transparencia Ley que fue promulgada para regular los centros de embarazo centros que ofrecen servicios relacionados con el embarazo. La Ley FACT requiere que las clínicas que atienden principalmente Las mujeres embarazadas para proporcionar ciertas notificaciones.

Las clínicas que tienen licencia debe notificar a las mujeres que: California ofrece servicios gratuitos o de bajo costo, incluyendo abortos, y darles un número de teléfono para llamar. Su propósito declarado es asegurarse de que los residentes del estado conozcan sus derechos y los servicios de atención de la salud lo que está disponibles para ellos.

Las clínicas sin licencia deben notificar a las mujeres de California que no han licenciado a las clínicas para servicios médicos vida. Su propósito declarado es asegurar que las mujeres embarazadas saben cuándo están recibiendo atención médica de profesionales con licencia.

Dos peticionarios de los centros de crisis de embarazo, uno con licencia y sin licencia, y una organización de crisis de embarazo presentaron una demanda. Alegaron que tanto la licencia y la no licencia coartan la libertad de expresión protegida por la Primera enmienda. La divulgación en cuestión aquí se refiere al discurso relacionado con el aborto.

Se trata de la salud, diferentes valores morales, y diferentes puntos de vista. Las Clínicas están obligadas a contar con un anuncio en donde informen los servicios que prestan en 13 idiomas diferentes. Se considera el requisito de 13 idiomas diferentes va demasiado lejos y es una carga innecesaria a la luz de la necesidad de asegurar los objetivos estatutarios es un asunto que concierne condado de Los Ángeles, y es un tema adecuado para una sede en Los Ángeles desafío que se aplican en luz de los hechos un demandante considera relevante.

No hay ninguna causa, distinguir entre las instalaciones que favorecen a favor de la vida y los que favorecen favor del aborto son diferentes puntos a de vista. Tampoco hay ninguna evidencia convincente ante la corte o ante los tribunales inferiores que la discriminación era el propósito o el efecto de la ley.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia declaró que los requisitos del Estado no violaron ya sea la protección de la Constitución de la libertad de expresión o la protección del derecho de una mujer a optar por tener un aborto.

Por lo anterior, la Corte está tomando la decisión optima, ya que considera claramente que las leyes estatutarias del Estado, incluyendo el requisito de que el médico debe informar a su paciente acerca de dónde podría aprender a tener al niño recién nacido (si se lleva a término) y la forma en que pudo encontrar ayuda financiando la información relacionada para producir el aborto, no está incurriendo en ninguna violación de los derechos Constitucionales.

De esta forma se está respetando, la forma de pensar de la mujer, al decidir si desea o no continuar con su embarazo o interrumpirlo, del establecimiento Hospitalario, si no tiene las

licencias necesarias, para practicar dicho procedimiento y le permite a la paciente tomar la opción de ir a otro centro Hospitalario que si las tenga, y de los demandantes de la Sentencia, porque no les está restringiendo su pensamiento con respecto al “No aborto” y les permite, seguir con su creencia de que el aborto no es una buena opción sin imponer ninguna sanción o repercusión al respecto, sobre la demanda interpuesta por ellos.

CONCLUSIONES

- El proceso educativo en Colombia con respecto a la religión, no puede renunciar, a estas alturas, a lo que con tanta dificultad ha llegado a definirlo: como un proceso de formación intersubjetiva que lleva a la búsqueda de la verdad, de manera crítica y fundada en argumentos y pruebas empíricas. Incrustar en la escuela una lectura literal, acrítica, descontextualizada y exclusiva de la Biblia puede significar un retroceso en lo que se ha logrado en la educación laica. Podemos decir entonces que las creencias religiosas son una fuente moral importante; no reconocerlo es absurdo. Pero hay otras fuentes de enorme importancia, cuyo desconocimiento y más aún, la no puesta en práctica de sus enseñanzas empobrece a los seres humanos. Pero esas fuentes religiosas en toda su diversidad deben ser leídas e interpretadas a la luz de la razón, con las exigencias textuales y contextuales que la misma exige, como condición para no caer en simplismos, dogmatismos y manipulaciones. Asimismo, se tiene que evitar caer en la tentación de buscar soluciones morales-espirituales a problemas de naturaleza económica, social o política.
- En Colombia, en el quehacer profesional de los trabajadores de la salud, debe de aceptarse el hecho de la ausencia o presencia de las creencias religiosas en las personas sobre las cuales se ejercen las funciones de promoción y prevención de salud, pues mientras más conocimientos se tenga sobre éstas y otras cogniciones que la acompañan, como las referidas a la salud, mayor colaboración y resultados se obtendrá en cualquier nivel de atención en el que se trabaje, sin embargo podemos denotar como debido a la creencias religiosas de las personas, se encuentra un choque de derechos fundamentales,

como lo son el de la Vida contemplado en la Constitución Política en su artículo 11 y el de las creencias Religiosas o derecho a la libertad de culto consagrado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 19.

- Desde el punto de vista de los grupos religiosos, las distintas formas jurídicas se constituyen en cauces más o menos adecuados para la actividad religiosa. En este sentido poseen un aspecto de libertad, de libre elección ("opciones"), en función de la propia naturaleza, fines, actividades y aspiraciones. Puede entonces ocurrir que un ente que desarrolla actividades religiosas no considere oportuno ni aspire al reconocimiento jurídico específico previsto por el ordenamiento para las entidades religiosas (la personalidad jurídica especial), y que prefiera moverse dentro de los amplios márgenes del Derecho privado, con o sin personalidad jurídica. Es probablemente entonces cuando aparece con mayor vigor la virtualidad "originaria" de los derechos fundamentales de libertad religiosa, asociación y reunión, como fundamento más que suficiente para llevar a cabo actividades religiosas colectivas, y el carácter subordinado, o si se prefiere "instrumental", de las distintas formas de personificación.
- La política de la naturaleza que se podría desprender de la propuesta teológica de Horkheimer consiste en una lucha contra la "realidad dada", lucha que pretende su transformación hacia un estadio de Justicia y conciliación, entre hombre y naturaleza, pero, al mismo tiempo, un duelo por la injusticia que cruza la historia de las sociedades. Con todo, un atisbo de una política radical que anhele una sociedad mejor, es decir, que haya superado la injusticia.

- La crítica de la religión llevada a cabo por el autor Horkheimer se constituye básicamente por la búsqueda de un conocimiento liberado de los dogmas y las autoridades eclesásticas; la crítica del pensamiento irracionalista, que niega el efecto ilustrado de la racionalidad de la ciencia, en nombre la mera intuición espiritual; el señalamiento de que toda forma de metafísica, o sea de creencia no abierta a la crítica, es ideológica; la demostración, junto al pensamiento escéptico, de que toda creencia es apenas un producto de la educación y la tradición; la definición de la religión como paradigma de la racionalidad objetiva.
- El sueño dogmático de la religión, surge para Horkheimer, el sedimento de aquellas convicciones que en él dejó el paso por el judaísmo, ya desde ahora como después en todo momento, de hacer de esa metafísica, de cualquier afirmación, una nueva religión, una nueva “fe luminosa”. El rechazo de la afirmación, tanto metafísica como teológica, se da en Horkheimer, ya desde estos primeros momentos, no bajo el signo del optimismo triunfal de la Ilustración racionalista, sino bajo el signo de la sobriedad y el duelo a la vista de la esperanza truncada, incumplida, de las víctimas. para un sueño luminoso de la fe judía «en el buen Dios que gobierna», y le abrió los ojos para la oscuridad sin fondo del sufrimiento del mundo y del enigma del mal; Pero a la vez, el sedimento de aquellas convicciones que le dejó el paso por el judaísmo le preservó, ya desde ahora como después en todo momento, de hacer de esa metafísica, de cualquier afirmación, una nueva religión, una nueva “fe luminosa”. El rechazo de la afirmación, tanto metafísica como teológica, bajo el signo de la sobriedad y el duelo a la vista de la esperanza truncada, incumplida, de las víctimas.

- El ilimitado anhelo de justicia y redención empuja al pensamiento de Horkheimer irresistiblemente al compromiso por la justicia, a no resignar mientras quede abierta la brecha de la injusticia y dure el escándalo del sufrimiento. Mientras dure el sufrimiento, afirma en otro fragmento, el sentido de la vida es «prestar ayuda», asistir a lo que sufre, a lo finito en su sufrimiento.

- Para Horkheimer religión dentro del Orden Constitucional o Político apunta hacia la toma de decisiones acertadas en base a la presencia del anhelo de lo justo. Donde mi prójimo es igual a mí, y la solución óptima sería encontrar el equilibrio, para que ninguna persona salga perjudicada, ni moral, ni económicamente; ya sea desde el ámbito social que se enmarque el conflicto, ocasionado a raíz de su convicción o creencia religiosa, respetando así la pluralidad de creencias religiosas, para cada quien puede practicar lo que es propio de él.

- La Constitución colombiana de 1991, junto con la Ley Estatutaria de Libertad religiosa (1994), constituyen el punto de referencia primero y principal en el tratamiento jurídico civil del factor religioso. El desarrollo de los principios de libertad religiosa, laicidad, igualdad y cooperación ha incidido directamente en el régimen jurídico de las iglesias y de sus entes. Se creó, en efecto, un nuevo tipo de personalidad jurídica para las iglesias y confesiones, y el correspondiente registro, con la posibilidad de celebrar convenios o pactos de Derecho público con el Estado colombiano, y a la vez la potestad de fundar entes religiosos; sin embargo, al demarca las creencias religiosas, y realizar un paralelo

con otros Derechos Fundamentales, consagrados en la Constitución Política de Colombia, se puede denotar claramente como dentro de las sentencias enunciadas, Colombia, no tiene una línea establecida, para solucionar conflictos de carácter religioso, y que de esta forma cuando hay una colisión de derechos fundamentales, el jurista en algunos casos, termina vulnerando alguno de estos.

- Los derechos humanos o fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los DDHH son fruto, así mismo de toda una evolución histórica que ha recopilado la experiencia cultural de civilizaciones milenarias. Los Sumerios Romanos, Griegos y la Biblia Judeocristiana registran principios que se consideran base de los parámetros recogidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas para llegar a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos humanos. En Colombia, a pesar de los continuos conflictos internos, se ha gestado la tradición de conformar un Estado de Derecho que si no garantiza en su totalidad el cumplimiento y respeto a los DDHH, si se preocupa por ratificar todos los convenios internacionales que versen sobre el tema y crear políticas de estado tendientes a disminuir y minimizar el impacto que la violación de los Derechos de la Población civil tiene en el contexto nacional.

- Así, pues podemos denotar como en los Tribunales Internacionales, dentro de los diferentes campos de acción, cuando entran en colisión derechos Humanos, con las creencias religiosas, los Tribunales tienen una línea de acción para salvaguardar y protegerlos; dando como resultado una aplicación, idóneo de la solución óptima planteada por Horkheimer, ya que se respeta la pluralidad de creencias religiosas.

BIBLIOGRAFÍA

- Constitución Política de Colombia (1991). Recuperado de https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-345/02, 09 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-778/14, 17 de octubre de 2014, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-832/11, 17 de octubre de 2014, Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-778/14, 17 de octubre de 2014, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, 24 de marzo de 1998, Sentencia T-098/11, 22 de febrero de 2011, Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-430/93, 17 de octubre de 2014, Magistrado Hernando Herrera Vergara, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 662/99, 07 de septiembre de 1999, Magistrado Alejandro Martínez Caballero, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 393/97, 07 de septiembre de 1999, Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 662/99, 07 de septiembre de 1999, Magistrado Alejandro Martínez Caballero, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 101/98, 24 de marzo de 1998, Magistrado Fabio Morón Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 377/95, 24 de agosto de 1995, Magistrado Fabio Morón Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 401/94, 12 de septiembre de 1994, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14 de septiembre de 2017.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 411/94, 19 de septiembre de 1994, Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14 de septiembre de 2017.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 052/10, 02 de Febrero de 2010, Magistrado Mauricio González Cuervo, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria consultado el 14 de septiembre de 2017.

- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 659/02, 15 de Agosto de 2002, Magistrado Clara Inés Vargas Hernández, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 327/09, 14 de Mayo de 2009, Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 982/2001, 13 de Septiembre de 2001, Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa Díaz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 823/2002, 04 de Octubre de 2010, Magistrado Rodrigo Escobar Gil, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 350/1994, 04 de Agosto de 1994, Magistrado Alejandro Martínez Caballero, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 510/1998, 18 de Septiembre de 1998, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 1175/2014, 18 de Septiembre de 1998, Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 817/2011, 01 de Noviembre de 2011, Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.
- García Bossio María Pilar, “Anhelo de justicia. Horkheimer, el rol de lo religioso en la teoría crítica y el potencial emancipador”, en Memoria Académica UNLP-FaHCE”, (2016).
- Habermas Jürgen, Israel o Atenas, ensayos sobre religión, teología, y racionalidad, Trotta, Madrid, 2001.
- Horkheimer, Max. (2000). Anhelo de Justicia Teoría Crítica y Religión, Madrid, España: Trotta. Edición Juan José Sánchez.
- Küng Hans, ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo, ediciones cristiandad, Madrid, 1979.
- Ley 133, (1994). “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/14_ley_133_94.pdf.
- Ley 133-1994, 23 de mayo de 1994, Recuperado de www.alcaldiabogota.gov.co.
- López González, E. (2017), “*Pensamiento y Cultura, blog*” Recuperado de <https://estebanlopezgonzalez.com/author/estebanlopezgonzalez/>.
- Ley 115 de 1994, 08 de febrero de 1994, Artículo 5 numeral 1, Recuperado de www.mineduacion.gov.co/1621/articles-85906 consultado el 16 de agosto de 2017.
- Ley 115, Artículo 5, numeral 1, Recuperado de: www.mineduacion.gov.co/1621/articles-85906.

Sánchez Juan José, Anhelos de Justicia Teoría Crítica y Religión Max Horkheimer, Trotta, Madrid, 2000.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2013), en el asunto Eweida y otros contra el Reino Unido, Recuperado de https://ocw.uca.es/pluginfile.php/3442/mod_resource/content/1/Eweida%20y%20otros%20vs%20Reino%20Unido.pdf

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2014), en el asunto Fernández Martínez contra España, Recuperado de <http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-2014.pdf>

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2009), en el asunto Fernández Martínez contra España, Recuperado de: <http://relapt.usta.edu.co/images/Caso-Fernandez-Martinez-STEDH-Junio-2014.pdf>

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2004), en el asunto Leyla Sahin contra Turquía, Recuperado de: https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033703/mod_resource/content/1/estudiante%20turca%20CEDH.pdf.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (1993), en el asunto Kokkinakis contra Grecia, Recuperado de: http://idpbarcelona.net/docs/actividades/seminarioddff/caso_kokkinakis.pdf.